

**ALCANCES Y LÍMITES DEL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD DE
PROTEGER: ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD FRENTE AL
CONFLICTO EN LIBIA EN EL 2011 Y SIRIA DURANTE EL PERIODO 2011-2014**

MARÍA DEL PILAR PERILLA SILVA

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C., 2016**

“Alcances y límites del principio de la responsabilidad de proteger: actuación del Consejo de Seguridad frente al conflicto en Libia en el 2011 y Siria durante el periodo 2011- 2014”

Estudio de caso

Presentado como requisito parcial para optar al título de

Internacionalista

En la facultad de Relaciones Internacionales

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:

María del Pilar Perilla Silva

Dirigido por:

Margarita Cadavid Otero

Semestre I, 2016

RESUMEN

El propósito de este estudio de caso es determinar los alcances y límites de la Responsabilidad de Proteger, tomando como ejemplo la actuación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el conflicto en Libia y Siria. Para esto es necesario analizar fuentes primarias documentos oficiales y secundarias como artículos académicos, para así comprobar que la evolución del concepto de soberanía ha permitido que se legitimen las intervenciones con fines humanitarios, ya que todos los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, de lo contrario, la comunidad internacional debe tomar medidas para evitar o detener los crímenes masivos.

PALABRAS CLAVE: *Responsabilidad de Proteger, crímenes masivos, soberanía, derechos humanos, Naciones Unidas.*

ABSTRACT

The purpose of this case of study is to determine the scope and limits of the Responsibility to Protect, as exemplified by the actions of the Security Council of the United Nations in the conflict in Libya and Syria. This requires analyzing primary and secondary sources such as official documents and academic articles, in order to ensure that the evolution of the concept of sovereignty has allowed to legitimize interventions for humanitarian purposes, and that all States have the primary responsibility to ensure the protection human rights of its citizens, otherwise, the international community must take steps to prevent or stop the massive crimes.

KEY WORDS: *Responsibility to protect, massive crimes, sovereignty, Human Rights, civil, United Nations.*

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
1. LA SOBERANÍA COMO RESPONSABILIDAD	10
1.1 El papel del Estado frente a la aparición de nuevos actores internacionales	11
1.2 Los derechos humanos en el sistema internacional	13
1.3 La soberanía como responsabilidad	16
2. “LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER” COMO HERRAMIENTA PARA PONER FIN A LA GUERRA CIVIL EN LIBIA	22
2.2 Aprobación de la resolución 1973: R2P en libia	28
2.3 Legitimidad de la intervención militar en libia	32
3. EL CONFLICTO EN SIRIA Y LA SITUACIÓN DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	35

3.1 Contexto histórico de Siria	35
3.2 Conflicto en Siria	36
3.3 El papel del Consejo de Seguridad	40
4. CONCLUSIONES	46
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

LISTA DE GRÁFICOS Y TABLAS

- Tabla 1. Resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas en Libia durante el 2011
- Tabla 2. Resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas en Siria durante el periodo 2011-2014

INTRODUCCIÓN

Después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las Naciones Unidas en 1945, surgió el nuevo orden mundial, a partir del cual el papel del Estado cambió, por un lado, ya no era el único actor internacional, ya que surgieron nuevos actores que desempeñan roles que eran exclusivos del Estado. Y por otro lado, se le atribuían más competencias a nivel interno en la parte política, económica y social; en cuanto a la soberanía, esta pasó de ser un atributo del Estado que se centraba solamente en la protección de sus fronteras, a una serie de obligaciones enfocadas en los intereses de los ciudadanos y en la protección y cumplimiento de los derechos humanos. De esta manera, la soberanía ya no se concebía como control sobre los habitantes de un territorio, sino como responsabilidad sobre los mismos.

Esta evolución de la noción de soberanía planteaba la necesidad de que los Estados se comprometieran con la protección de los derechos humanos, sin embargo, abrió el debate sobre el tema de la intervención, en caso de incumplimiento de este deber del Estado. Por esta razón, en el 2005 se propuso en el marco de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas el principio de la Responsabilidad de Proteger [R2P], con el propósito de reglamentar y establecer un proceso que guiara a la comunidad internacional acerca del cómo y cuándo se debía aprobar una intervención con fines humanitarios, y así evitar la intervención bajo intereses particulares de los Estados más poderosos dentro del sistema internacional.

Sin embargo, la implementación de la R2P se ha convertido en un tema controversial, ya sea por falta de voluntad política o porque aún priman los intereses particulares de los Estados sobre el verdadero propósito del principio, que es evitar y poner fin a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tal y como quedo explícito en el Informe de las Naciones Unidas:

Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esta responsabilidad conlleva a la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos y obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana (Naciones Unidas 2009, pág. 2).

De esta manera, la pregunta que busca responder esta investigación es ¿De qué manera la evolución del concepto de soberanía permitió plantear los alcances y límites de la Responsabilidad de Proteger en el caso de Libia y Siria?

Por lo tanto, la hipótesis que se abordará es que la ampliación del concepto de soberanía ha permitido que se plantee el principio de la Responsabilidad de Proteger, el cual abre la posibilidad a la intervención con fines humanitarios, ya que le permite establecer al Consejo de Seguridad una hoja de ruta con la que se busca garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en medio de una guerra civil, sin embargo, la falta de voluntad política, así como los intereses particulares han limitado la acción del mismo, tal y como se ha visto en el caso de Siria.

En aras de lo anterior, el objetivo principal de este estudio de caso es determinar los alcances y límites del principio de la responsabilidad de proteger, con base en la actuación del Consejo de Seguridad en el conflicto en Libia en el 2011 y la respuesta de este mismo organismo en el caso de Siria en el periodo de 2011 a 2014. Teniendo en cuenta el marco de la primavera árabe, la cual se dio entre finales del 2010 y principios de 2011. Durante este fenómeno, se llevaron a cabo una serie de revueltas en el mundo árabe, incluido siria y libia, frente a las cuales los gobiernos respondieron atacando a la población civil, por lo cual la comunidad internacional se vio avocada a intervenir. En el caso de Libia, la respuesta de la comunidad internacional se dio durante el mismo año que iniciaron las revueltas, mientras que en caso de Siria, el conflicto se prolongó, por lo tanto, en esta investigación se analizan a fondo los hechos del conflicto hasta el 2014.

En consecuencia, se plantearon los siguientes objetivos específicos: explicar cómo la evolución del concepto de soberanía ha abierto un debate acerca de la importancia de la intervención con fines humanitarios; identificar cuáles fueron los alcances de la Responsabilidad de Proteger en Libia; y finalmente, determinar los límites que imposibilitaron que la comunidad internacional aprobará este principio en el caso de Siria.

En la revisión de literatura realizada para esta investigación, queda claro que hay un debate acerca del manejo del concepto de la Responsabilidad de Proteger, el cual se centra en que la mayoría de veces este concepto es usado para justificar intervenciones militares en zonas de conflicto, bajo el argumento de proteger a la población civil de crímenes de guerra, sin embargo se hace de manera selectiva y no siempre se interviene, dejando en

ocasiones a la población a merced de las violaciones y vejaciones que se comenten en el marco de los diferentes conflictos o guerras civiles. La mayoría de los autores que han escrito acerca de este concepto, argumentan que aunque es necesario hacer algunos cambios con el fin de que su aplicación se de en cualquier escenario de conflicto, sin que estén involucrados intereses individuales que impidan la adopción de las medidas necesarias.

Es importante aclarar, que en esta investigación no se toma una posición frente al principio de la R2P, sino que intenta demostrar la importancia del mismo y cuáles han sido las falencias a la hora de evocarlo cuando hay un conflicto en un determinado Estado. Es importante profundizar más en este tema como internacionalista, ya que se puede observar un cambio importante dentro de la disciplina y es que los conflictos ahora no son entre Estados sino que predominan los conflictos a nivel interno, poniendo a la población civil en situación de vulnerabilidad.

Este nuevo tipo de conflictos se caracteriza, por una parte, por la presencia de nuevos agentes tales como grupos beligerantes, grupos insurrectos, organizaciones, etc. que le quitan al gobierno el monopolio de la fuerza. Asimismo, las cuestiones que suscitan los conflictos han variado: razones de identidad, etnia, religión, competencia por los recursos, ideología, entre otros. (Fernández 2013, pág. 6).

Por lo tanto, esto le propone un nuevo reto a la comunidad internacional y es por un lado, no intervenir en los asuntos internos de otros Estados, y permitir que sigan ocurriendo violaciones a escalas masivas de derechos humanos, convirtiéndose en cómplices, o por el contrario contribuir a detener y evitar dichos abusos, y de esta manera ayudar con el mantenimiento de la paz internacional. (Fernández 2013, pág. 7)

De esta manera, el presente trabajo de investigación por sus características, tiene un enfoque cualitativo y empírico, ya que se basará en datos descriptivos de ambos conflictos ya mencionados para así acercarse a la realidad y cumplir el objetivo de la investigación. Por ser un trabajo de esta naturaleza, el método es el inductivo, es decir, que se pueden elaborar conclusiones generales a partir de hechos particulares.

1. LA SOBERANÍA COMO RESPONSABILIDAD

El concepto de soberanía se ha ido modificando de acuerdo a las nuevas necesidades y características que configuran el sistema internacional, por lo tanto, ya no es solo un atributo del Estado el cual le otorga derechos a sus gobernantes, sino que también le genera una serie de deberes con sus ciudadanos. Es decir, que la soberanía implica una doble responsabilidad: externa, la cual se refiere al respeto de la soberanía de otros Estados; e interna, que es el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que están dentro del Estado. (Chetail, 2009, pág. 10) Además de esto, debido a los cambios que se han dado en el sistema internacional, el papel del Estado se ha transformado, ya que deja de ser el único actor en las relaciones internacionales, y junto a él aparecen otros actores que contribuyen o realizan funciones que anteriormente se consideraban exclusivas del Estado. Es así como las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las multinacionales, y hasta los individuos se convierten en actores del sistema internacional, con lo cual el Estado ya no es el único que tiene incidencia dentro de sus fronteras y fuera de ellas.

Con la aparición de estos nuevos actores, las acciones del Estado se auto limitan por medio de normas y reglas jurídicas internacionales, como tratados o convenios con otros Estados o a través de los regímenes internacionales¹ regulados mediante diferentes organizaciones internacionales. Entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU de aquí en adelante), de la cual hacen parte la mayoría de los Estados del sistema internacional.

En este sentido, el propósito de este primer capítulo es examinar a fondo el papel del Estado a nivel interno y externo, para así entender cómo ha ido evolucionando el concepto de soberanía y cómo debido a la aparición de nuevos actores internacionales los Estados han tenido entre otras cosas incluir dentro de sus funciones la garantía y protección de los derechos humanos.

¹ Definido como "un conjunto de principios implícitos o explícitos, normas, reglas y procedimientos de decisiones alrededor del cual las expectativas de los actores convergen en una determinada área de las relaciones internacionales. Los principios son creencias de hecho, causalidad y rectitud. Las normas son estándares de comportamiento definidas en términos de derechos y obligaciones. Las reglas son prescripciones y proscripciones para la acción. En los procedimientos de toma de decisión prevalece la

1.1. El papel del Estado frente a la aparición de nuevos actores internacionales

Históricamente el papel del Estado fue fundamental para la comprensión del sistema internacional, por eso su definición ha sido uno de los aspectos más importantes dentro de la disciplina de las relaciones internacionales. En Europa, durante el siglo XVI, los gobiernos se conformaban por monarquías absolutistas basadas en la teología, el rey era el único facultado para tomar decisiones, “durante la monarquía, los súbditos carecían de derechos frente al rey” (Aceves, pág. 48), no obstante, no fue sino hasta 1648 con la Paz de Westfalia² que se sientan las bases para la aparición del Estado moderno, con lo cual se terminó la confrontación religiosa, y se “le otorgó la soberanía a pequeños Estados de Europa central” (Rojas 2004, pág. 156).

Por medio del Tratado de Westfalia entonces se sentaron las bases del concepto de Estado: la población, el territorio, y la soberanía. En primer lugar, en cuanto a la población, se hizo un intento por homogenizarla de acuerdo a origen y lengua, por lo tanto, trajo consigo el desarrollo de la ciudadanía y la nacionalidad; en segundo lugar, aunque antes se sabía hasta donde llegaba cada territorio, con este modelo se reconocieron las fronteras de los otros Estados por lo que se estableció el respeto de las mismas; ligado a este punto se encuentra, “la soberanía estatal, que le garantizó a cada Estado el derecho de gobernar en sus propios territorios”, y de esta manera evitar que se interviniera en los asuntos internos de otros Estados. (Aceves 2004, pág. 49)

Por lo tanto, este fue el inicio de la noción de soberanía del Estado moderno. Hedley Bull, definió la soberanía interna como “la supremacía sobre cualquier autoridad existente entre la población o en el territorio” y la soberanía externa como “no supremacía, sino independencia de cualquier autoridad externa” (Bull 1977, citado por Barbé 2007, pág. 165).

Desde la perspectiva realista se consideraba el Estado como el actor único y por ende el más importante del sistema internacional, por lo tanto, su enfoque era de naturaleza estatocéntrica. Para los realistas, había una clara diferencia entre la política interna y la

² “Este tratado implicó el fin de las hostilidades, con el reconocimiento de la soberanía y los límites territoriales de manera perpetua. Además reconocían la libertad de conciencia de los súbditos de uno u otro Estado que viviera en el contrario y la libertad de comercio” (Aceves pág. 47).

política exterior: la primera se caracterizaba por la violencia organizada que rige dentro de las fronteras del Estado, y la segunda, es la lucha por el poder con otros Estados. Los tres principios fundamentales que integran la visión realista son: A) Los Estados son actores racionales dominantes. B) La fuerza es la herramienta eficaz en la política, ya que esta conlleva al poder. C) Hay una jerarquía en los asuntos de la política, la seguridad militar entonces se denomina como “*high politics*”, mientras que los asuntos económicos y sociales son “*low politics*”. (Keohane y Nye 1988, pág 40)

Frente a la soberanía, el realismo afirma que cada Estado la ejerce sobre su territorio y sus propios asuntos, de ahí entonces surge la necesidad de los Estados de velar por sus propios intereses, lo que a su vez implica que haya conflicto con otros Estados. (Cujabante 2009, pág. 96) Así mismo afirman que “está representada por la existencia de un poder centralizado que ejerce su autoridad legislativa y ejecutiva dentro de un cierto territorio” (Morgenthau 1979, citado por Espósito 1997, pág. 191).

Sin embargo, posterior a la II Guerra Mundial, tomaron fuerza nuevos enfoques teóricos bajo el paradigma liberal, en el que se reconoce la aparición de nuevos actores internacionales con “capacidad normativa para influir y, al mismo tiempo, se ha ampliado la agenda de estudio y se han incluido temas que afectan a distintas regiones del mundo” (Caballero y Tabernero 2015, pág. 118). En este orden de ideas, bajo esta visión el Estado ya no era el único actor dentro del sistema internacional, ya que “una empresa transnacional, puede llegar a ser más importante como actor internacional que un Estado, esto debido a que la primera posee una capacidad mayor para influir sobre otros actores internacionales, en comparación con la capacidad del Estado” (Restrepo 2013, pág. 637). Y dentro de los nuevos actores internacionales, Esther Barbé identificó 6 tipos: Actores Gubernamentales Interestatales (AGI), Actores No Gubernamentales Interestatales (ANGI) como las multinacionales y ONG, Actores gubernamentales no centrales (AGNC), los cuales son aquellos gobiernos que mantienen un comportamiento internacional, Actores Intraestatales no Gubernamentales (AING), son aquellos grupos privados que tienen vínculos con otros actores internacionales, los Estados y finalmente los individuos. (Barbé 2003, citado por Restrepo 2013, pág. 638)

En conclusión, con el surgimiento de estos nuevos actores internacionales y las nuevas amenazas que afectaban a los Estados, el rol del mismo dentro del sistema

internacional tuvo que cambiar, ya que su accionar era cada vez más interdependiente, dejando claro que para responder a muchos de los problemas que se enfrentaba tanto a nivel interno y externo era necesaria la cooperación.

Dentro de estos nuevos retos se incluye el cumplimiento de los acuerdos y los regímenes internacionales que contemplan la garantía y protección de los Derechos Humanos, planteando de esta forma que para el Estado la soberanía se convierte en una responsabilidad, al mismo tiempo que la comunidad internacional debe velar para que los Estados protejan y garanticen los derechos humanos.

1.2. Los derechos humanos en el sistema internacional

La Segunda Guerra Mundial evidenció que frente a ciertos regímenes la población civil quedaba completamente desprotegida, las vejaciones cometidas por Adolf Hitler frente a la población alemana judía dejaron claro que había que poner límites para evitar que estos crímenes se volvieran a cometer. Por lo tanto, una de las primeras medidas adoptadas por los países vencedores de la guerra fue la creación de las Naciones Unidas, con la Carta de San Francisco³, en la que se “universalizó e internacionalizaron los derechos humanos” (Anaya 2009, pág. 58). Por lo tanto, la Declaración quedó de la siguiente manera:

[...] Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre [...] (Organización de las Naciones Unidas [ONU] 1948, párr. 4-5).

La creación de la ONU fue el punto de inicio no solo para la universalización de los derechos humanos sino también de la figura de “Comunidad internacional”⁴, en la cual los

³ “La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. [...] Estipula que las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete) y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete), incluso los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad [...]” (ONU 1945, párr. 1-3).

⁴ La creación de la ONU fue el inicio de lo que se conoce actualmente como “comunidad internacional”, es decir, un conjunto de Estados que se comprometen a “defender la vida, la libertad, la independencia, y la libre profesión de cultos, así como preservar los derechos humanos y la justicia”, es entonces, a partir de este

Estados miembros se comprometían con una serie de derechos y deberes por medio de reglas y normas algunas de carácter vinculante respecto a ciertos asuntos que podrían convertirse en una amenaza para la paz y seguridad internacional. Para esto era necesario que se promoviera entonces desde la ONU, los derechos que tienen todos los seres humanos independientemente de su religión, raza, idioma, sexo y del Estado en que residan. (Anaya 2009, pág. 57)

Sin embargo, la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos no garantizaba *per se* su cumplimiento, todo lo contrario, no fue sino hasta la década de los 90 que el Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar ratificaba que era necesario profundizar en la protección de los derechos humanos, y para esto se debían adjudicar obligaciones de protección humanitaria. (Piedrahita 2014, pág. 50)

En 1993, se realizó la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, donde se acordó por un lado, el Plan de Acción en contra de las violaciones masivas de derechos humanos haciendo énfasis en la relación entre “democracia, derechos humanos y desarrollo” para de esta forma ampliar el alcance de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Y por el otro lado, se puso en evidencia la vulnerabilidad de “mujeres, niños, minorías étnicas y religiosas, indígenas, discapacitados, migrantes y refugiados, y pidieron el establecimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el cual fue creado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1993” (Anaya 2009, pág. 64).

Para cumplir con este propósito era necesario que el Consejo de Seguridad⁵ le diera más importancia a los asuntos relacionados con los derechos humanos, vinculando las violaciones masivas como amenaza contundente para la paz y la seguridad internacional.

momento que se consolida el concepto como tal, como consecuencia del nuevo orden internacional. (Sanz, pág. 476) Por lo tanto, para esta investigación la comunidad internacional será entendida de esta manera.

⁵ Está conformado por cinco miembros permanentes (China, Francia, Federación Rusa, Gran Bretaña y Estados Unidos) y diez miembros no permanentes que son elegidos por la *Asamblea General* de la ONU por un periodo de dos años. las grandes potencias cuentan con “poder de veto”, porque las cuestiones de fondo se resuelven con nueve votos afirmativos, dentro de los cuales deben estar los de los cinco miembros permanentes. [...] Tiene la “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” (Carta de las Naciones Unidas, artículo 28). Para tal fin, el *Consejo de Seguridad* tiene facultades como determinar cuándo hacer uso o no de la fuerza, realizar recomendaciones sobre métodos para poner fin a las amenazas de la paz internacional, instar al arreglo pacífico de controversias, crear sistema de regulación de armamentos (ONU 1948, pág 68).

De esta manera, aumentaron las operaciones de paz emprendidas por el Consejo de Seguridad en conflictos como los de El Salvador, Haití, Guatemala, Liberia, Namibia, Camboya y Bosnia-Herzegovina, las cuales no cumplieron con su objetivo principal, el cual era proteger a la población civil de la violación de derechos humanos por parte de sus propios gobiernos, y por el contrario fueron fuertemente criticadas por Estados como China y Rusia, que se oponían a las operaciones que permiten la intervención o el uso de la fuerza. Pero casos de inacción como el de Yugoslavia y Ruanda, reflejaban la necesidad de actuar de la comunidad internacional. (Anaya 2009, pág. 65)

En consecuencia, la ONU reglamentó este tipo de intervenciones, las cuales solo podrían ser legítimas si cumplían con cinco condiciones: la primera, amenaza a la seguridad humana o al Estado; la segunda, intentar negociar o buscar soluciones pacíficas; la tercera, después de haber intentado varias opciones el uso de la fuerza es el último recurso; la cuarta, la duración, escala e intensidad debe ser proporcional a la amenaza; y la quinta, la intervención no puede ser peor que la inacción. (Cadet 2012, pág. 83)

Podemos así constatar que se ha creado un tejido normativo cada vez más cerrado tendiente a demarcar los derechos del hombre y sus implicancias, con la finalidad de asegurar la puesta en práctica efectiva y la garantía internacional. Es la comunidad mundial de Estados quien ha elaborado y adoptado estas normas y, en particular, cada Estado invitado a adherirse y a respetarlas, especialmente ratificando las convenciones internacionales que aseguran la garantía colectiva de los derechos humanos [...] (Marie 2008, pág. 157).

Sin embargo, este tipo de reglamentación de la ONU en cuanto a la protección de los derechos humanos, planteaba otro debate, pues al autorizar la intervención en un Estado, se violaba la soberanía del mismo al intervenir en sus asuntos internos, sin embargo, debía dársele la misma importancia al tema de los derechos humanos, y fue por esto que los Estados se comprometieron en garantizar y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos ante la ONU. Por lo tanto, cuando cualquier Estado fallara con en esta responsabilidad, la comunidad internacional podría impartir sanciones y en última instancia recurrir al uso de la fuerza. Finalmente, esto hizo que se replanteara el concepto de soberanía estatal, para que esta fuera entendida no sólo como un derecho del Estado, sino también como un deber.

1.3. La soberanía como responsabilidad

La visión tradicional del concepto de soberanía se basaba en el poder y control que tiene el Estado dentro de sus fronteras, ejerciendo así su derecho a la libre autodeterminación, es decir, la potestad para determinar la organización política y las leyes que regirán en el interior; y el derecho a la no intervención por parte de otros Estados. (Piedrahita 2014, pág. 47) Este concepto era de naturaleza absolutista, ya que le otorgaba poder al gobernante, derechos pero no deberes sobre los ciudadanos, y asimismo ningún otro Estado podía intervenir en los asuntos internos del otro. La definición tradicional plantea lo siguiente:

El concepto de Soberanía estuvo históricamente vinculado a la racionalización jurídica del Poder, en el sentido de transformación de la capacidad de coerción en Poder legítimo. Bobbio sostuvo que el concepto de Soberanía puede ser concebido de manera amplia o de manera estricta: la primera, indica el Poder de mando de última instancia en una Sociedad política y, consecuentemente, la diferencia entre ésta y las demás organizaciones humanas, en las cuales no se encuentra este poder supremo. La segunda, en sentido estricto, en su significación moderna, el término Soberanía aparece a fines del siglo XVI junto al Estado Absoluto, para caracterizar de forma plena el Poder estatal, sujeto único y exclusivo de la política (Bobbio 1979, citado por Cruz 2009, pág. 14).

Sin embargo, la noción de soberanía durante el marco de la paz de Westfalia, es decir, la no intervención⁶ tomó un nuevo giro por los aportes de pensadores de ideología liberal que planteaban que “la soberanía es de tipo popular, reside en el pueblo y es transferida para que el gobernante conduzca al Estado según los intereses de la ciudadanía” (Aceves 2004, pág. 48). Fue así entonces como el concepto de soberanía fue ampliado, basándose en los intereses de los ciudadanos que constituían al Estado, y en los derechos y deberes de sus gobernantes. En este sentido, casi dos siglos después el respeto de los derechos humanos se convertía en un limitante para la soberanía, ya que la violación de estos supondría la intervención de la comunidad internacional, claro está bajo ciertas circunstancias, tal y como se explicó anteriormente.

Otro de los factores que propició al cuestionamiento del concepto de la soberanía fue la creciente globalización, proceso con el cual se fortaleció la interdependencia entre los diferentes actores del sistema internacional. Con base en este fenómeno, el desafío de la

⁶ “Se considera el principio de un nuevo orden diplomático europeo, pues sin duda, detuvo la dominación de una sola potencia de tipo imperial, dando paso a la dominación hegemónica. [...] Los tratados de Westfalia implicaron el fin de las hostilidades, con el reconocimiento de la soberanía y los límites territoriales de manera perpetua. Además reconocían la libertad de conciencia de los súbditos de uno u otro Estado que viviera en el contrario y la libertad de comercio” (Aceves 2004, pág. 47).

nueva concepción de la soberanía es confrontar las nuevas amenazas que no pueden ser atendidas por el Estado solo, sino que involucra a toda una región o un continente, tal como los temas de contaminación, el creciente desarrollo, la alimentación, la salud, los derechos humanos, la promoción de bienes comunes como la paz, etc. (Inneraty 2012, pág 18) Las amenazas son de tipo “multidimensional, en la medida en que las amenazas pueden provenir de diferentes temas, y multidireccional, pues estas amenazas pueden atacar contra la seguridad de actores tanto estatales como no estatales” (Cujabante 2009, pág. 101).

De esta manera se pasaba de la soberanía ejercida como control, a la soberanía como responsabilidad, es decir, que el concepto de soberanía se ha vuelto mucho más versátil y se modificó de acuerdo las nuevas necesidades del sistema internacional. Tanto la protección de los derechos humanos y el papel de la comunidad internacional como la interdependencia, han dado lugar a nuevos escenarios en los que impera la cooperación y la intervención, para enfrentar las nuevas amenazas, que ponían en riesgo la estabilidad política y democrática, como el narcotráfico, el terrorismo, el daño medioambiental, la pobreza, la desigualdad, entre otras. (Cujabante 2009, pág.102)

En este orden de ideas, queda demostrado que los derechos humanos y las relaciones de interdependencia entre los Estados son ahora un asunto de la agenda internacional, “la vida internacional ya no se resume en una yuxtaposición de soberanías y una confrontación de poderes, se va configurando poco a poco un humanismo internacional, o mejor, trasnacional” (Inneraty 2012, pág 19).

Dado lo aquí expuesto, el concepto de soberanía plantea que esta se basa en dos pilares: el primero, se apoya en la idea de que los individuos tienen derechos humanos inalienables, naturales e iguales, los cuales deben ser protegidos y garantizados por el Estado, estos derechos son universales y están por encima de lo político; el segundo implica que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos de sus ciudadanos, sin embargo, cuando esto no se cumple, la comunidad internacional adquiere derechos y deberes para que adopten las medidas necesarias para actuar y tomar la responsabilidad. (Bellamy 2009, pág 19)

Por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación el concepto de soberanía se asumirá desde la definición planteada por Bellamy, como la responsabilidad que tienen los Estados para garantizarles a sus ciudadanos la protección de los derechos humanos.

Empero, es necesario determinar por qué las intervenciones con fines humanitarios no han sido exitosas y porqué es necesario reglamentar este concepto a través de la construcción de un nuevo principio que obligue a los Estados a cumplir con su responsabilidad.

La intervención humanitaria

Cuando se plantea la soberanía como responsabilidad se genera una discusión acerca del principio de no intervención de los Estados en los asuntos internos de otro, ya que si el Estado no es garante de los derechos humanos, entonces la comunidad internacional tiene el deber de intervenir, sin embargo, la intervención no puede ser de manera unilateral, sino bajo la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con el fin de evitar, que los Estados más poderosos intervengan en busca de sus propios intereses, es importante esclarecer cómo y cuándo se debe aprobar una intervención con fines humanitarios.

Para esto, las Naciones Unidas tenía la tarea de aclarar el tema de la intervención humanitaria, pero principalmente tenía que promover la protección de los derechos humanos por encima del interés nacional, ya que el hecho de que la comunidad internacional interviniera ante crisis como genocidios y muertes a gran escala ayudaba a que se ejerciera de manera responsable la soberanía “mediante el fortalecimiento de las capacidades estatales que se veían menguadas en el contexto de estos nuevos conflictos y crisis humanitarias” (Bellamy 2009, citado por Piedrahita 2014, pág. 52).

Kofi Annan, quien se encargó del Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, antes de ocupar el cargo de Secretario General de la ONU de 1997-2006, mantuvo las propuestas de sus antecesores acerca del debate acerca de la soberanía “El ejercicio de la soberanía implica responsabilidad y no solo poder” (Annan 1999, citado por Piedrahita 2014, pág. 53).

Sin embargo, autores y académicos plantean todo lo contrario en cuanto a la intervención humanitaria, Cadet (2014, pág. 83) cita a Sandoz (2004) quien sostiene que si se admiten este tipo de intervenciones entonces las relaciones internacionales se pondrían en duda, y estaría en riesgo el sistema internacional ya que habría la posibilidad de cometer abusos teniendo como pretexto la protección de los derechos humanos.

La intervención humanitaria es entonces una “lucha por una causa justa y parece revivir el concepto de guerra justa” (Bermejo y López-Jacoiste 2013, pág. 27). En este

sentido, toma importancia el término de “*peacebuilding*”, bajo el cual se diferencian dos tipos de paz: negativa y positiva, según lo planteado por Johan Galtung⁷. La primera se refiere a la “ausencia directa de violencia organizada entre grupos humanos o naciones”; y la segunda establece “que la paz es posible por medio de la cooperación entre tales grupos o naciones, para así erradicar las raíces del conflicto” (Galtung 1975, citado por Chetail 2009, pág. 1).

Según lo planteado anteriormente es por medio de la cooperación que se puede alcanzar el mantenimiento de la paz en el sistema internacional. Por lo tanto, la ONU planteó dos principios fundamentales: centralización del uso de la fuerza, bajo responsabilidad de la ONU; y lo más importante de la intervención es la protección de los derechos humanos. (Bermejo y López-Jacoiste 2013, pág. 29) Esto con el fin de dejar claro cómo debe llevarse a cabo la intervención y para demostrar que no se viola el derecho de no intervención, porque no se pretende atacar contra la integridad territorial de un Estado ni mucho menos controlar la jurisdicción interna.

Sin embargo, con la ola de intervenciones⁸ que se llevaron a cabo durante la década de los 90, quedó expuesto el fracaso de la ONU ante conflictos que implicaban la violación de los derechos humanos, no solo porque no cumplía con su propósito sino porque empeoraba la situación de las víctimas por el aumento de la escalada de violencia. Por lo tanto, la preocupación de la comunidad internacional se centraba en no repetir estos mismos errores, sino crear un mecanismo que permitiera que de acuerdo a los Artículos 55⁹ y 56¹⁰

⁷ “Johan Galtung nació en Noruega, en 1930. Es sociólogo y matemático, de formación; científico social, de ejercicio intelectual. Galtung cultiva y labora su sociología de la paz, el desarrollo, la política y la cultura. Es el creador de la perspectiva y la metodología de la “Investigación sobre la Paz”(Peace Research)” (Universidad de Alicante 2002, párr. 3).

⁸ Esta ola de intervenciones fue llevada a cabo por el Departamento de Misiones de Paz de la ONU, el cual es el encargado de dirigir las operaciones y de crear las condiciones para instaurar la paz duradera en un país sumergido en medio de un conflicto. “Una operación de mantenimiento de la paz está integrada por personal militar, policial y civil, que trabaja para proporcionar seguridad y apoyar la consolidación de una paz política en una etapa inicial” (ONU, párr. 2).

⁹ Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones [...] la Organización promoverá:

A) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;

B) La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y

C) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

de la Carta, los Estados cumplieran con la obligación de “Actuar conjunta o separadamente para promover el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos” (Cadet 2014, pág. 87).

En conclusión, se puede observar como el papel del Estado y el concepto de soberanía evolucionó, especialmente en cuanto a los derechos humanos, estos se universalizaron con la Declaración de los Derechos Humanos y fueron incluidos en la Carta constitutiva de las Naciones Unidas por la presión de diferentes ONG y la opinión pública, lo que deja en evidencia cómo otros actores internacionales han influenciado en la nueva configuración del sistema internacional, adoptando un papel igual de importante que el Estado.

Fue así entonces que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de la ONU, fijo dentro de los temas más urgente la protección de los derechos humanos, y en vista de las operaciones fallidas de las intervenciones humanitarias en la década pasada, se propuso crear un mecanismo mucho más eficiente para lograr su cumplimiento en situaciones de conflicto, por lo tanto, se sentaron las bases de lo que sería el principio de la Responsabilidad de Proteger.

¹⁰ “Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55” (ONU).

2. “LA REPOSABILIDAD DE PROTEGER” COMO HERRAMIENTA PARA PONER FIN A LA GUERRA CIVIL EN LIBIA

A partir del nuevo enfoque de la soberanía como responsabilidad, la importancia de la intervención con fines humanitarios, se sentaron las bases para que desde la Secretaría General de la ONU se promoviera un principio con el cual se velaría por la protección de los Derechos Humanos bajo ciertas condiciones, y para este propósito, entonces se creó el principio de la Responsabilidad de Proteger [R2P].

En el 2001, luego del ataque terrorista del 11 de septiembre, se publicó el informe “The responsibility to protect” de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS, por sus siglas en inglés), planteó la necesidad de aprender de los errores del pasado, para instaurar una norma y cumplir con el propósito de asistir a la población que no era protegida por su propio Estado.

Para esto era necesario redefinir la intervención humanitaria, con el fin de regularla, se plantearon cuatro objetivos: primero, las reglas deben ser claras para así saber con precisión cuándo y cómo se debe intervenir; segundo, se debe intentar por medios pacíficos como la negociación, la diplomacia, antes de aprobar una intervención militar; tercero, si se aprueba la intervención militar esta debe limitarse a cumplir los fines propuestos, tratando de causar el menor daño posible en la población civil; y cuarto, procurar eliminar las raíces del conflicto para así instaurar una paz sostenible y duradera. (International Commission on Intervention and State Sovereignty [ICISS] 2001, pág. 11)

Por medio de este informe, la ICISS intentaba hacer un cambio en el lenguaje y pasar de intervención humanitaria a la responsabilidad de proteger, para poner fin al dilema planteado por Kofi Annan acerca de cómo se debe reconciliar el respeto por la soberanía de los Estados y la necesidad de actuar ante violaciones masivas de derechos humanos. Ya que la R2P plantea el deber que tiene el Estado de proteger a la población civil de crímenes masivos tales como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la depuración étnica. Por lo tanto, cuando el Estado no cumple con su deber, la responsabilidad recaerá en la comunidad internacional. Estos objetivos se constituyen como los primeros avances hacia el principio de R2P.

Posteriormente en el 2005, en el marco de la Cumbre Mundial, Kofi Annan, Secretario General de la ONU, destacó la importancia que debía dársele a la soberanía como responsabilidad, por lo tanto, presentó el informe “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, publicado en el 2001, en el que se propuso fortalecer las Naciones Unidas mediante los valores de la seguridad, el desarrollo, y los derechos humanos, “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos humanos” (Annan 2001, citado por Espósito 2004, pág. 5).

En consecuencia, la Carta debía interpretarse como una herramienta para el respeto y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos y no ser un instrumento de los Estados más fuertes para abusar de sus derechos. (Annan 2001, citado por Espósito 2004, pág. 6) En este sentido, era fundamental que los Estados miembros de la ONU entendieran que tenían la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y que se debía llegar a un consenso acerca de cómo iba a quedar establecido este principio para que no se prestara a una mala interpretación y después se convirtiera en una herramienta de poder de algunos Estados. Sin embargo, era fundamental llegar a un acuerdo acerca del principio y cómo este se implementaría:

La aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente (Naciones Unidas [ONU] 2005, pág. 2).

La Cumbre Mundial del 2005 fue el punto de inicio de la R2P, no obstante, no fue posible que todos los Jefes de Estado llegaran a un acuerdo sobre este principio. Por un lado, Canadá, Estados Unidos, y la Unión Europea, aprobaron y le dieron apoyo institucional al principio de la R2P, y por el otro lado, Estados como Irán, China, Rusia, el Grupo de los No Alineados y el Grupo de los 77, lo desaprobaban, ya que podría utilizarse “para que los Estados poderosos abusen de los más débiles y que la R2P va contra de los principios de la Carta de la ONU, en la que se establece la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, soberanía e integridad territorial” (Espósito 2004, pág. 15).

Lo más importante, como lo defendía Kofi Annan era aprender de las peores tragedias que habían ocurrido durante el Siglo XX, como “el holocausto, el genocidio en Ruanda y las matanzas masivas en Srebrenica” (ONU 2009, pág.5), para así tener en cuenta que no se trataba de que la ONU u otras organizaciones internacionales se enfocaran solo en la seguridad del Estado sino en la población. Para esto era necesario incentivar a los Estados a través del diálogo y la educación, acerca de la importancia de los principios humanitarios, bajo este precepto entonces se creó como ya se mencionó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Coordinador del Socorro de Emergencia, y Asesor especial para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas, entre otros asesores y representantes especiales. (ONU 2009, pág. 17)

Por medio de estas oficinas y representantes se han determinado las causas de varios conflictos que se presentaron en el sistema internacional, entre los cuales siempre se ha identificado la desigualdad como la raíz de este tipo de tensiones. En este orden de ideas, otra de las tareas de la ONU era ampliar la asistencia para el desarrollo y así fortalecer las capacidades del Estado, consolidar instituciones capaces de promover el desarrollo para que cuando surja alguna tensión puedan disminuir los riesgos, poder mediar entre procesos gubernamentales y civiles, generar consenso y diálogo que permitan que hayan mecanismos de participación política, y finalmente la capacidad de resolver conflictos locales pero no por el uso de la fuerza sino por una infraestructura de paz. (ONU 2009, pág. 22)

Luego de estudiarse con precaución cada uno de estos conflictos en los que hubo millones de pérdidas de vidas humanas y violación a sus derechos fundamentales, se identificaron tres aspectos que tenían en común: primero, en todos los escenarios hubo un ambiente de inestabilidad política, económica y social, indicadores de advertencia de que se podía generar una ola de violencia; segundo, estas señales fueron ignoradas tanto por los gobiernos como por la comunidad internacional; y tercero, la ONU no hizo lo que tenía que hacer por falta de recursos y compromiso político. (ONU 2009, pág.6)

No fue fácil llegar a un acuerdo acerca de la adopción del principio dentro de las Naciones Unidas, ya que este suscitaba toda serie de reacciones entre los representantes de los diferentes Estados. Por un lado, estaban sus defensores, quienes argumentaban que esta era la manera de detener aquellos gobiernos que no cumplían con su responsabilidad, y por

otro, los detractores, quienes planteaban que el principio no era más que una doctrina imperialista que amenazaba la soberanía y debilitaba la autonomía de los Estados. (Bellamy 2010, pág. 144)

En el 2005, Después de varios años de discutir acerca del principio se llegó a un consenso en la Asamblea General, en la cual se establecieron tres pilares que conformarían la responsabilidad de proteger:

Primer pilar: La responsabilidad de proteger que incumbe al Estado:

Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva a la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia (ONU 2005, Párr. 138).

Con la aprobación del párrafo anterior se comprueba y se reconoce que el papel fundamental de la prevención, en primera instancia lo debe cumplir el Estado, y la comunidad internacional tendría un rol complementario. Desde esta perspectiva, la base de la R2P es el Estado, y su deber es velar y garantizar los derechos humanos de la población, ya que esta es una condición primordial de la soberanía como responsabilidad. Y esta a su vez promueve las políticas de inclusión, y para esto es necesario, que haya instituciones capaces de controlar de manera responsable los posibles conflictos que se puedan dar como consecuencia de la desigualdad o de cualquier otro problema. (ONU 2009, pág. 11)

Los Estados, como sujetos de derecho internacional deben estar en capacidad de atender a sus ciudadanos y por ningún motivo pueden atentar contra la vida de los mismos, ni mucho menos quedarse al margen del conflicto sin hacer nada por la seguridad e integridad de la población. Según las normas internacionales y los compromisos a los que están sujetos como miembros de la ONU, están en la obligación de cumplir con estas normas y requisitos, y aplicarlas en su legislación nacional.

Es importante para que el principio sea eficaz, que la R2P este incorporada en todas las dimensiones de la sociedad tanto internacional como local. Es claro que en ninguna sociedad es aceptable que ocurran conflictos, y que en el marco de los mismos se den situaciones de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica o crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, es responsabilidad del Estado judicializar a los victimarios. De

esta manera también es importante promover la responsabilidad individual, es “fundamental impedir que los delitos de poca entidad se conviertan en verdaderos crímenes y poner fin por completo a esos ultrajes a la dignidad humana” (ONU 2009, pág. 15). Y para esto, es necesario que los gobiernos estén comprometidos a cumplir y garantizar las condiciones ya nombradas, para así evitar que un problema se convierta en una verdadera tragedia humanitaria a gran escala.

Segundo pilar: Asistencia internacional y formación de capacidad

La comunidad internacional como fuerza complementaria al Estado es fundamental en el apoyo que le pueda ofrecer en momentos de crisis, sin embargo, cuando ese Estado no está en disposición de garantizar la protección de los derechos humanos por omisión u acción, entonces según la R2P, la responsabilidad recae sobre la comunidad internacional ya sea por asistencia humanitaria, vía diplomática con el gobierno y en última instancia el recurso a la fuerza. En el párrafo 139 del informe final de la Cumbre Mundial quedó especificado lo siguiente:

Cuando las autoridades políticas de un Estado estén decididas a cometer crímenes o actos relativos a la responsabilidad de proteger, las medidas de asistencia en el marco del segundo pilar serán de escasa utilidad y sería conveniente que la comunidad internacional empezara a hacer acopio de la capacidad y la voluntad para responder de manera oportuna y decisiva (ONU 2005, párr. 139).

El propósito de este segundo pilar es por un lado, que la comunidad internacional trabaje en primera instancia en conjunto con países en los que hay inestabilidad política, por medio de la educación y el diálogo, para detener o prevenir los focos de violencia. Y por otro lado, cuando ya existe una alta probabilidad de conflicto, persuadir al gobierno para que tome las medidas necesarias y no incurra en la violación masiva de derechos humanos.

Tercer pilar: Respuesta oportuna y decisiva:

Cuando el Estado no fortalece sus capacidades y falla en la protección de las personas entonces la comunidad internacional puede actuar bajo los capítulos VI¹¹ y VII¹² de la

¹¹ Arreglo pacífico de controversias.

Carta de las Naciones Unidas para ayudar en protección de poblaciones que se enfrentan a un genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica o crímenes de lesa humanidad. Y en el párrafo 139 del Informe queda explícito que “la comunidad internacional podría recurrir a un conjunto más amplio de medidas colectivas, tanto pacíficas como no pacíficas” cuando se cumplen dos requisitos: uno, cuando los medios pacíficos no funcionan, y dos, cuando las autoridades no cumplen con la R2P.

Dadas estas condiciones, el Consejo de Seguridad puede tomar todas las medidas que sean necesarias para mediar, persuadir o intervenir, teniendo como prioridad la protección de los derechos humanos. Lo esencial de este pilar, es que cuando se hayan agotado todos los medios necesarios para que el Estado cumpla con la R2P, la comunidad internacional, para actuar de manera oportuna y efectiva, no debe seguir procedimientos ya que no prevalece “la forma sobre el fondo, ni el proceso sobre los resultados” (ONU 2009, pág. 25), es decir, que cuando hay pruebas de una violación masiva de derechos humanos en un Estado determinado, el Consejo de Seguridad puede actuar de manera rápida y eficaz sin tener en cuenta los procedimientos para poder aprobar una intervención militar de acuerdo con la R2P.

Los Estados afirman su responsabilidad de prevenir la incitación a la comisión de los crímenes o actos especificados. Cuando es evidente que un Estado no lo hace, la comunidad internacional debería recordar a las autoridades dicha obligación, así como el hecho de que ese tipo de actos puedan remitirse a la Corte Penal Internacional (ONU 2009, pág. 26).

Con estos tres pilares entonces la ONU buscaba sentar las bases necesarias para aplicar el principio, y de esta manera evitar darle otros usos diferentes al propósito de su creación. El hecho de haber llegado a un consenso dentro de la Asamblea General era el primer paso para pasar de las palabras a hechos concretos, ya que el desafío posterior a la Cumbre Mundial del 2005 era saber cómo se iba a implementar este principio.

2.2. El caso libio: Aprobación de la Resolución 1973: R2P en Libia

¹² Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Acciones que debe emprender el Consejo de Seguridad cuando se identifican amenazas que atentan contra la paz y la seguridad internacional

A mediados de febrero del 2011, tuvo lugar, la revuelta más grande en contra del régimen de Muammar Gaddafi, líder libio durante 42 años, quien llegó al poder por un golpe de estado en 1969. En esa época, era capitán del Ejército, y logró derrocar al rey Idris en la ciudad de Bengasi. El líder libio, además fue reconocido porque en la década de los 70 hizo un llamado a su población para promover el panarabismo, y en 1972 publicó tres tomos del denominado Libro Verde¹³, en el cual planteaba las bases teóricas del “*yamahiriya*”, un sistema que él definía como “democracia perfecta”, porque era el pueblo el que iba a ejercer el poder. (Enric González, 2011, párrafo 5)

El panarabismo liderado por Nasser y apoyado por Gaddafi, intentó unificar Libia Egipto, Siria, Túnez y Sudán y financió a diferentes grupos con ideologías antiimperialistas, que en muchos casos utilizaban el terrorismo como estrategia de lucha. A causa de esto, el gobierno estadounidense de Ronald Reagan en 1986, bombardeó Libia, a cuyo gobierno no le quedó otra salida que iniciar los acercamientos con occidente, “pagó indemnizaciones, ofreció contratos petrolíferos, y posteriormente se sumó a la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, y en el 2008, fue invitado por Barack Obama a la cumbre del G-8” (Enric González, 2011, párrafo 9).

A pesar de la aparente estabilidad en cuanto a las relaciones internacionales del gobierno libio, a partir del 2000, la situación interna estaba a punto de colapsar. Los ciudadanos libios exigían la democratización del régimen, las revueltas se propagaron rápidamente y fue así como se dividió la población libia. Por un lado estaban quienes apoyan al gobierno, la tribu de los Gaddadfa, a la cual pertenece el líder libio y los Magarha, quienes pertenecían las Fuerzas Armadas, servicios secretos, y mercenarios; y por otro lado los opositores, que son la mayoría de la población joven, rebeldes de las Fuerzas Armadas, y la tribu más grande del país, los Warfallah. (Rizzi, 2011, párrafo 2)

Mientras las revueltas se propagaban rápidamente por todo el país, las violaciones contra los derechos humanos aumentaban. Según Amnistía Internacional, las fuerzas leales a Muammar Gaddafi atacaron deliberadamente a los protestantes, cometieron graves

¹³ “El Libro Verde, escrito por el coronel Muammar el Gaddafi entre 1976 y 1979, ha acabado dividiendo a los tripolitanos en dos grupos. Los que lo consideran la palabra revelada del líder y una solución a todos los problemas de la existencia, y los que creen que sus 100 páginas son un insulto a la inteligencia” (Cózar 2011, párr. 1).

violaciones de derechos humanos, entre los cuales está el homicidio de miles de manifestantes desarmados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, y torturas, lo que se constituye como crímenes de lesa humanidad. (Amnistía Internacional, 2011, página 79)

En consecuencia, tanto Naciones Unidas como organizaciones internacionales regionales rechazaron la respuesta desproporcionada del régimen de Gaddafi. Por un lado, la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica y la Unión Africana, suspendieron la participación de Libia dentro de las organizaciones, y por el otro lado, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó el uso de la fuerza y lo catalogó como un crimen contra la humanidad. (Añaños 2013, pág 31) Por lo tanto, la primera medida que tomó el Consejo de Seguridad fue aprobar la Resolución 1970 el 26 de febrero de 2011, con la cual se le imponían sanciones no militares, remitió el caso al Fiscal de la Corte Penal Internacional, impuso embargo de armas y sanciones como el congelamiento de fondos del clan Gaddafi, la prohibición para salir del territorio libio y la creación de una zona de exclusión aérea. (Lobo 2012, pág. 43)

Estas medidas fueron insuficientes, la escalada de violencia aumentó y el punto de inflexión para llevar a cabo la intervención fue la violación de la zona de exclusión aérea¹⁴ por parte del gobierno libio. Por lo tanto, el 17 de marzo del mismo año, el Consejo de Seguridad aumentó y reforzó las sanciones, aprobando así la Resolución 1973, bajo el principio de la R2P, a pesar de la abstención de China y Rusia. En seguida, se dio inicio a la intervención militar “Odisea al amanecer”¹⁵, operación militar conformada por Francia, Estados Unidos y Reino Unido, con la cual se atacó por aire, mar y tierra las defensas aéreas libias, depósitos de suministros, y tropas terrestres leales a Gaddafi¹⁶. No obstante, el 27 de marzo la OTAN tomó el control de las operaciones militares aéreas y navales, del

¹⁴ El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas veta cualquier tipo de vuelo en el espacio aéreo de Libia, a excepción de aquellos cuyos fines sean “humanitarios” (BBC 2011, párr. 1).

¹⁵ El objetivo de la misión era hacerle frente a los ataques desproporcionados de las fuerzas leales a Gaddafi. Los bombardeos de la coalición evitaron que hubiera una masacre en la ciudad de Bengasi y Trípoli. Las tropas de esta misión sobrevolaron la capital desde el principio hasta su retirada, destruyeron bases militares y baterías antiaéreas, sin embargo, lo más importante es no causar bajas entre la población. La operación ‘Amanecer de Odisea’ ha estado liderada por franceses, estadounidenses y británicos, con apoyo aeronaval español y una participación activa de dos países árabes: Emiratos Árabes Unidos y Qatar (El mundo 2011, párr. 4-6).

¹⁶ Países como España, Italia, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, hicieron parte de la coalición internacional.

embargo de armas y de la zona de exclusión aérea, esta operación se denominó “Protector Unificado” (Añaños 2013, pág. 31).

Con esta operación, el Consejo de Seguridad actuó invocado el R2P, con el apoyo de organizaciones regionales anteriormente nombradas, bajo el argumento de que había que proteger a la población civil de los desmanes del gobierno de Gaddafi y porque la situación libia era una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Por lo tanto, en virtud del Capítulo VII de la Carta, el Consejo autorizó a los Estados miembros para tomar las medidas que fueran necesarias con el fin de proteger a la población que estaba bajo amenaza de ataque, sin embargo, quedó excluida “una fuerza de ocupación extranjera de cualquier forma en cualquier parte del territorio libio” (Lobo 2012, pág.43). Condición fundamental de la R2P, ya que el propósito no era llevar a cabo un ataque a la integridad territorial libia sino la protección de los derechos humanos, ya que el mismo Estado no era capaz de garantizarlos y al contrario, los civiles eran vulnerables a los ataques de las fuerzas leales al régimen de Gaddafi.

Finalmente, por un lado, con el apoyo de la comunidad internacional los rebeldes se tomaron el poder en la ciudad de Trípoli, capital libia, ocupando el Palacio de gobierno, y se consolida el Consejo Nacional de Transición (CNT), el cual fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como la unidad representativa de Libia ante la comunidad internacional. (CECOPAC 2011, citado por Lobo 2012, pág. 43) Y por otro lado, se abre un proceso penal con órdenes de arresto en contra de Muammar Gaddafi y su familia, meses después Gaddafi es capturado y ejecutado intentando huir de Sirte. (Añaños 2013, pág. 32) Posterior a la caída del régimen, el Consejo de Seguridad dio por finalizada la resolución 1973 (R2P) y la misión de la OTAN. A finales de octubre se retiran las tropas del territorio libio, y se establece la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL), mediante la resolución 2009 de la ONU, la cual se aprobó inicialmente por tres meses, para así “restablecer el orden y el imperio de la ley” (Ver Anexo 1.) (Lobo 2012, pág. 44).

Sin embargo, este tiempo no fue suficiente por lo tanto las labores de la UNSMIL se prolongaron, con el fin de “ofrecer asistencia y asesoría inmediata al CNT, así como vincularse a la sociedad civil. [...] la misión se pondrá a trabajar en las áreas en las que se ha solicitado el apoyo de la ONU, como la organización de las elecciones, la asesoría para

la protección de la seguridad pública y la justicia durante la transición” (ONU 2011, párr. 3). En consecuencia, se estaba cumpliendo el último requisito de la R2P, que se refiere a la reconstrucción de la infraestructura de paz del Estado en el que se interviene.

De esta manera, el Consejo de Seguridad ratificaba que para aprobar una intervención bajo este principio se debe seguir una hoja de ruta que demuestra que la responsabilidad de la comunidad internacional empieza desde la prevención hasta la reconstrucción. En situación de postconflicto es necesario que los esfuerzos de la comunidad internacional se vean reflejados en tres puntos específicos: la seguridad, la justicia y reconciliación, y el desarrollo económico. (Warner y Giacca 2009, pág 292)

En primer lugar, en cuanto a la seguridad, se debe garantizar la seguridad de la población, sin importar ni el origen étnico ni quién estuvo en el poder antes, sino implementar programas de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, y así reformar el sector de la seguridad a través de la reconstrucción de las fuerzas militares y de la policía.

En segundo lugar, el tema de la justicia y la reconciliación plantea que la responsabilidad radica en tomar las medidas necesarias para instaurar la justicia transicional y así restablecer el sistema judicial (incluyendo los tribunales y la policía). Un tema relacionado a este es que el regreso y la reintegración de los refugiados y desplazados internos se debe facilitar por medio de estrategias efectivas. Y en tercer lugar, los compromisos del desarrollo económico deben estar dirigidos hacia la reducción de la pobreza y hacia la instauración de un gobierno democrático. Los actores locales que trabajan con la asistencia de los organismos de desarrollo nacionales e internacionales deben comprometerse con el apoyo al programa de recuperación de la comunidad del Estado y proporcionar la creación de capacidad para el gobierno nacional en diversos sectores, como la educación, la salud y la producción de alimentos. (ICISS 2001, citado por Warner y Giacca, pág 305)

La comunidad internacional durante la Cumbre Mundial en el 2005, reconoció la responsabilidad de la ONU para ayudar a los Estados a recuperarse después de la devastación de un conflicto por medio de la Comisión de Construcción de paz, la cual se creó como mecanismo institucional para asistir en la reconstrucción del Estado consolidando las estructuras necesarias para la protección de la población y fortaleciendo

los vínculos institucionales entre las operaciones de paz y los esfuerzos de construcción de paz durante el postconflicto. (ONU 2005, párr. 139)

En este orden de ideas, queda claro que la alerta temprana, la evaluación y la reconstrucción hacen parte del núcleo fundamental del principio de la R2P, además del énfasis en las víctimas que se enfrentan a un Estado el cual no es capaz de garantizar la protección de sus derechos y que todas ellas fueron tenidas en cuenta durante la implementación del R2P en Libia.

2.3. Fallas en la intervención militar en Libia

Posterior a la aprobación de la Resolución 1973 de las Naciones Unidas se planteó un debate académico en cuanto al principio de la R2P, ya que a pesar de que la comunidad internacional contribuyó a que no se prolongara más el conflicto, también es cierto que hubo ciertas irregularidades que ponen en duda la legitimidad de la intervención y se deja en evidencia que además de buscar la protección de la población civil había intereses particulares de los Estados de la coalición internacional.

Quienes aprueban la intervención bajo el principio de la R2P en Libia, afirman que este se aplicó correctamente, ya que habían pruebas suficientes para apelar a este principio. Tal y como lo afirmó el autor Jeremy Kinsman, quien sostuvo que no se podía permitir la pasividad de la comunidad internacional y volver a cometer los mismos errores tal y como había pasado por la inacción en Ruanda. (Kinsman 2011, citado por Lobo 2012, pág. 45) Además, la Comisión Internacional de Investigación para Libia de la ONU, Amnistía Internacional y el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger coincidían, según sus informes oficiales presentados a la comunidad internacional, que las acciones del régimen libio contra la población civil constituían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.¹⁷ (Lobo 2012, pág 45)

Por otro lado, para sus detractores como M. Cecilia Añaños, está claro que el uso de la R2P en el caso Libia no se justificaba porque primero, este principio plantea que se debe intentar por medios pacíficos antes de recurrir al uso de la fuerza, sin embargo, el Consejo

¹⁷ “Entendidos como el uso excesivo de la fuerza, asesinatos ilegales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ataques indiscriminados contra la población civil” (Lobo 2012, pág. 45).

de Seguridad no recurrió a los artículos 2 (3)¹⁸ y 2 (4)¹⁹ de la Carta de la ONU; segundo, debe haber evidencia de la no protección por parte del Estado, para lo que es necesario que haya certeza de la necesidad de proteger, no obstante, la investigación debió hacerla una instancia neutral e imparcial; tercero, hubo ambigüedades en cuanto a los motivos que plantea la R2P, ya que los crímenes de lesa humanidad y los ataques a la población civil no fueron evidentes cuando se aprobó la primera resolución; y cuarto, las sanciones militares no tenían un objetivo claro, ni siquiera hay pruebas de que la coalición internacional haya protegido la población civil ya que se enfocaron solo en el derrocamiento del régimen. (Añaños 2013, pág.38-40)

Juan Francisco Lobo en su artículo “La intervención humanitaria ante la crisis en Libia y Siria: Un estudio comparativo”, cita a Lawrence Modeme (2012), quien sostuvo que el conflicto libio no era una amenaza a la paz y la seguridad internacional, ya que esto presupone el conflicto entre dos Estados, y este no era el caso, además coincidía con Añaños en que no había pruebas suficientes para aprobar en primera medida la Resolución 1970. Incluso argumenta que la situación en Libia era un conflicto interno, por lo tanto, era Asamblea General la que tenía competencia para actuar de acuerdo a los Artículos 10²⁰, y 14²¹ de la Carta de la ONU, y no el Consejo de Seguridad ya que no se trataba de la paz y la seguridad internacional.

En conclusión, ante este debate entre defensores y detractores de la R2P es cierto que aunque el gobierno Libio no se hizo responsable de la protección de la población y por el contrario se excedió en el uso de la fuerza, también es cierto que el Consejo de Seguridad se apresuró en adoptar el principio sin intentar establecer acercamientos con el gobierno de Gaddafi. Además, la operación militar de la coalición internacional, como sucede en

¹⁸ “Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” (ONU, párr. 2).

¹⁹ “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas” (ONU, párr. 2).

²⁰ “La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos” (ONU)

²¹ “Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas”

muchos casos, lejos de propender por la protección de los ciudadanos, y lo que produjo fue un empeoramiento del conflicto entre las fuerzas leales a Gaddafi y los rebeldes, generando más muertes, además de esto la operación dejó la impresión de que su objetivo era el derrocamiento de un régimen irrespetuoso de los derechos humanos, generando incertidumbre en otros países de la región.

3. LA R2P Y EL ROL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN EL CASO SIRIO

Con la aplicación de la R2P en Libia la comunidad internacional demostró actuar con rapidez y eficacia ante las pruebas que demostraban la grave violación de derechos humanos por parte del gobierno de Muammar Gaddafi en contra de su propia población. Sin embargo, en el caso de Siria no ocurrió lo mismo, a pesar de ser escenarios similares, con el agravante de las denuncias de ONG que indican que el gobierno sirio utilizó armas químicas en contra de su propia población.

En este orden de ideas, surgen varios cuestionamientos sobre la aplicación de la R2P: en este capítulo se abarcará el contexto histórico de Siria para entender el conflicto, y después se analizarán las medidas que adoptó el Consejo de Seguridad, para determinar el por qué no se tuvo en cuenta una posible intervención militar bajo el principio de la R2P.

3.1. Contexto histórico de Siria

En el caso de Siria, el detonante de las revueltas fue la detención y tortura de unos jóvenes que pintaron grafitis haciendo alusión a la revolución en la pared de una escuela. A partir de este hecho, miles de manifestantes salieron a las calles a exigir la renuncia de Basher Al-Assad, quien sucedió a su padre después de su muerte en el 2000, Hafez Al-Assad (BBC Mundo, 2014, párrafo 4). Llegó al poder en 1971, por medio de un plebiscito en el cual obtuvo un 99.2% de los votos favorables, luego en 1972 creó el partido político Frente Nacional Progresista, que se convirtió en un partido dominante a lo largo de su mandato. (CIDOB 2001, párrafo 19)

Assad fue reelegido desde entonces cada siete años: el 23 de enero de 1978, el 10 de febrero de 1985, el 2 de diciembre de 1991 y el 10 de febrero de 1999, siempre obteniendo a su favor el 99% de los votos. (CIDOB 2001, párrafo 22) No obstante, en 1990 Al-Assad intentó acercarse a occidente: tuvo un encuentro con George Bush, restableció relaciones diplomáticas con Reino Unido y participó en la Conferencia de Paz para Oriente Próximo que se llevó acabo en Madrid. (Roberto Ortiz, 2001, párrafo 25)

En cuanto a su mando a nivel interno, este líder político gobernó el país bajo el lema de “unidad, libertad, socialismo” y se oponía al imperialismo occidental. Además se caracterizó por reprimir a la oposición y por manipular los medios de comunicación. Fue esta opresión sumada a la falta de libertades, entre otras razones lo que hizo que los ciudadanos sirios votaran a favor de su hijo, Basher Al-Assad, un líder joven y estudiado que pensaron que sería capaz de hacer la transición hacia un Estado moderno. (Fanny Kertzman, 2013, párrafo 7)

Sin embargo, pocas cosas cambiaron. Primero, mantuvo una ley que impuso su padre en 1963, la cual prohibía “el derecho a formar asociaciones, organizaciones o partidos políticos para expresar o defender sus opiniones” (Fanny Kertzman, 2013, párrafo 8). Segundo, en el 2006 prohibió que los disidentes viajaran dentro o fuera de Siria. Tercero, en el 2007 se aprobó en el Parlamento que todos los comentarios que se hicieran por chat debían ser públicos. Y cuarto, en el 2008 y 2011, el gobierno sirio bloqueó Youtube, Facebook y Twitter. (Fanny Kertzman, 2013, párrafo 15)

En el 2007 hubo elecciones en las que el único candidato fue Basher Al-Assad, quien obtuvo el 97,6% de los votos, razón por la cual generó descontento en la población siria. (Fanny Kertzman, 2013, párrafo 16) La suma de todos aspectos fue lo que hizo que en el 2011 se produjera el fenómeno de la primavera árabe en Siria, la cual fue contenida de forma violenta y desproporcionada por parte de las fuerzas del gobierno de Basher Al-Assad.

3.2. Conflicto en Siria

Fue así como se generó el conflicto, una de sus características, es la multiplicidad de actores, por un lado, está el gobierno sirio de Basher Al-Assad, el cual pertenece a la minoría chiita del islam, mientras que la mayoría de la población siria pertenece a la corriente sunita²², uno de los factores claves del conflicto, ya que de caer el régimen

²² “La religión del Islam tiene casi 400 años de historia y es la segunda mayor religión del mundo por número de fieles, con más de 1.300 millones de personas, pero está dividida en dos grandes fracciones desde la muerte del profeta Mahoma: suníes y chiíes. [...] En el año 632 murió el profeta Mahoma y entre sus seguidores surgieron discrepancias sobre quién debía ser su sucesor. Los fieles se dividieron en dos corrientes: la primera (chiíes) optó por el yerno y primo de Mahoma (Alí), quien, según sus seguidores, el propio Mahoma había designado como sucesor. Además, el hecho de que fuese pariente del profeta era un requisito indispensable

perderían el poder. (Siegel, 2013, párrafo 3) Por lo tanto, abandonar el poder no ha sido la opción de Al-Assad, todo lo contrario, la respuesta del gobierno frente a los protestantes ha sido violenta y desproporcionada cometiendo torturas, desapariciones, y usando armas químicas en contra de su propia población.

Según Amnistía Internacional, el gobierno sirio ha cometido múltiples crímenes de guerra desde que empezó el conflicto, en el informe “Exprimiendo la vida de Yarmouk: crímenes de guerra contra civiles asediados”, se documentó el sufrimiento de civiles sirios y demuestran cómo poco a poco se fue estrechando el cerco contra los civiles. Las mujeres y niños han sido los más afectados: han muerto por falta de comida y por no tener acceso a los servicios médicos. (EFE, 2014, párrafo 3)

Y por el otro lado, está la oposición siria, la cual se divide en dos: En primer lugar, está el Consejo Nacional Sirio (CNS), creado en marzo del 2011, este grupo ha estado fragmentado al interior y no ha sabido adoptar una posición clara en cuanto a la intervención militar internacional, ni ha definido una estrategia política y militar para derrocar el régimen de Al-Assad. Inclusive, ha sido fuertemente criticado por no estar al tanto de lo que pasa al interior de Siria, y por su falta de influencia en los grupos rebeldes armados. Por lo tanto, en noviembre del 2012 se creó la Consejo Nacional de la Revolución Siria y las Fuerzas de la Oposición, con el propósito de ampliar la base de apoyo de la oposición política, y apoyado por el Ejército Sirio Libre, conformado por desertores y voluntarios. (CIDOB, párr. 10-11)

Y en segundo lugar, hay cuatro grupos yihadistas²³ dominantes con el objetivo de derrocar el régimen y así instaurar la *sharia*²⁴: primero, el grupo Al-Nusra, el cual tiene

para los chiíes. La otra corriente (suníes) se decantó por Abu-Bakr, suegro de Mahoma, mercader de La Meca y miembro de la tribu de Quraish. Abu-Bakr se convirtió en el primer Califa y como tal aplacó revueltas, expandió su imperio (sobre todo en Irak) y realizó la primera compilación del Corán, pues hasta entonces se recitaba de forma oral. Abu-Bakr murió en el 634 y nombró como segundo califa a Umar ibn al-Jattab, quien fue ratificado por la comunidad” (Europa-Press 2014, párr. 4-5).

²³ “El Corán exhorta a los verdaderos creyentes para emprender la guerra santa (yihad), para erradicar o neutralizar infieles e incrédulos con base en la propagación de la verdadera religión, el Islam. Los creyentes que son asesinados o derrotados en la guerra santa son ampliamente recompensados por Dios. Los musulmanes devotos ponen los intereses del Islam por encima de todo, y el hecho de morir en el campo de batalla los convierte en un mártir, estatus que garantiza una posición favorecida en el más allá” (Nigosian 2004, pág. 113).

²⁴ “El término “sharia” literalmente significa “camino”, “vía” al abrevadero. Ya que muchos árabes eran habitantes del desierto durante la época del profeta Mahoma, por lo tanto, el camino que conducía al agua era esencial para la vida. La sharia es la ley divina (en términos generales su origen es divino y se basa en la fe). Para los musulmanes, el concepto de ley es un concepto mucho más amplio de lo que es en otros discursos

vínculos con el grupo terrorista Al-Qaeda; segundo, el Daesh, quizá uno de los más importantes porque cada vez toma más fuerza y está conformado por yihadistas nacionales y extranjeros; tercero, está el Ejército del Islam, conformado por más de 50 grupos armados islamistas; el Frente Islámico, que reúne diferentes organizaciones armadas rebeldes. (Gutiérrez 2015, pág. 102)

En este orden de ideas, queda claro que la división de la oposición, la creciente influencia del radicalismo islámico, y el apoyo tanto de Estados (Rusia, China e Irán) como de grupos armados como (Hezbollah), permiten entender por qué Basher Al-Assad continúa en el poder, a pesar de las denuncias de la comunidad internacional acerca de la violación masiva de los derechos humano.

Violación de derechos humanos

Desde el inicio del conflicto en Siria en el 2011, tanto las fuerzas del régimen de Basher Al-Assad como los grupos armados rebeldes, han atacado a la población civil, causando la pérdida de millones de vidas, y otros desplazados que han tenido que huir hacia otros países como refugiados. En el Informe de Amnistía Internacional²⁵ del 2015 se dice que según la ONU, hasta finales del 2014, el conflicto había causado la muerte de alrededor de 200.000 personas, 7,6 millones de desplazados internos y aproximadamente 4 millones de refugiados en países como Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, y la región del Kurdistán Iraquí. (Amnistía Internacional 2015, pág. 393) En este sentido, se expondrá a continuación cómo se llevó a cabo la violación masiva de los derechos humanos por ambas partes de los involucrados en el conflicto sirio.

En primer lugar, por un lado, las fuerzas gubernamentales atacaron directa e indiscriminadamente las ciudades controladas por la oposición, con bombardeos aéreos y

seculares, ya que este incluye detalles de la conducta restringida en el sentido jurídico, cuestiones mínimas de comportamiento, así como cuestiones relacionadas con el culto y el ritual. La perspectiva del creyente en la ley se convierte en un elemento central de la auto-definición para un musulmán (Keshavjee 2013, pág. 57).

²⁵ “Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por Peter Benenson. Este abogado británico, inspirado en el caso de unos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la libertad en su país [...] A medida que Amnistía Internacional fue creciendo como movimiento de personas que trabajan por personas, su foco de atención se fue ampliando a víctimas de otros abusos de los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte. En 1977 la labor de Amnistía Internacional fue recompensada con el premio Nobel de la Paz, y un año más tarde la organización fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” (Amnistía Internacional, párr. 1-4).

de artillería sobre zonas residenciales, con lo cual dejaron un gran número de civiles muertos y heridos, entre ellos niños. Muchos de estos ataques se hicieron de forma sistemática y reiterada con bombas de barril, “Estas bombas no guiadas altamente explosivas son de fabricación barata, producción local y, por lo general, están construidas a partir de grandes barriles de petrolero, cilindros de gas y depósitos de agua” (Human Rights Watch [HRW] 2015, párr. 6); municiones con cloro, las cuales están prohibidas por el Derecho Internacional; municiones de racimo, que son armas de efecto indiscriminado que expulsa pequeñas bombas incendiarias sobre una superficie amplia, causando quemaduras graves a las víctimas, “Human Rights Watch identificó al menos 249 ataques en 10 de las 14 gobernaciones de Siria en los que se utilizaron bombas de racimo entre julio de 2012 y julio de 2014” (HRW 2015, párr. 5).

Y por otro lado, está el asedio y la negación de acceso humanitario, el régimen sirio tenía militares en algunas ciudades como Damasco, Yarmuk, Daraya y la Guta oriental, custodiándolas, sin embargo, también había presencia de los rebeldes, por lo tanto, los civiles quedaban atrapados en medio del fuego, expuestos al hambre y la falta de asistencia médica y de servicios básicos. (Amnistía Internacional 2015, pág. 394) Además las fuerzas gubernamentales, bombardearon hospitales, impidiendo el suministro de material médico, bloquearon la ayuda humanitaria internacional, y detuvieron a trabajadores y voluntarios médicos, por su parte, Physicians for Human Rights “acusó a las fuerzas gubernamentales de lanzar ataques sistemáticos contra el sistema de salud en las zonas controladas por grupos de oposición, y de haber matado a 569 profesionales de la salud entre abril de 2011 y octubre de 2014” (Amnistía Internacional 2015, pág. 395).

Según el informe de Human Right Watch, en el 2013 se expuso la evidencia ante la comunidad internacional del uso de armas químicas por parte del gobierno contra su población, la cual muestra que los helicópteros del gobierno lanzaron bombas de barril con cilindros de gas cloro en pueblos del norte de Siria. Después de este ataque, por la presión internacional el gobierno sirio accedió eliminar las armas químicas según la Convención sobre Armas químicas, y en el 2014 fueron retiradas para su destrucción. (Human Right Watch 2013, pág. 356)

En segundo lugar, están los abusos cometidos por la oposición, los cuales lanzaban con tanques y artillería, morteros y proyectiles contra las fuerzas leales del gobierno que

controlaban ciertas ciudades del país. El grupo armado rebelde, quizá con más protagonismo en el conflicto ha sido el Estado Islámico, el cual arrestó militares, secuestró civiles (activistas y periodistas), extranjeros y miembros de los otros grupos rebeldes, para someterlos a su estricta ley islámica y ejecutarlos, primero condenaban a las víctimas y después los mataban a tiros o los decapitaban delante de las personas, la mayoría de las víctimas eran hombres, sin embargo, también se conoció el caso de jóvenes de 15 años y mujeres. Como prueba de estas ejecuciones, el grupo Estado Islámico publicó los videos en internet, con fines de propaganda y para formular exigencias al gobierno sirio y a la comunidad internacional. (Amnistía Internacional 2015, pág. 395)

En conclusión, la situación de los derechos humanos en Siria era cada vez peor, y las acciones de las Naciones Unidas como las Resoluciones 2042, 2043, 2118 y 2139 (ver anexo) y haber enviado a Kofi Annan, no fueron suficientes para detener esta situación humanitaria.

3.3. El papel del Consejo de Seguridad

En el periodo del 2011 al 2014, el Consejo de Seguridad no aprobó ninguna medida coercitiva para detener la violación de derechos humanos. El 27 de abril del 2011, se hizo el primer balance acerca de la difícil situación que estaban viviendo los ciudadanos sirios, sin embargo, durante esta primera reunión quedaron evidenciadas las diferencias dentro del Consejo de Seguridad, ya que mientras el delegado británico presionaba para actuar de inmediato, el representante ruso sostenía que era un asunto interno, ya que este conflicto no era una amenaza para la paz y seguridad internacional, así la dimensión de la violación de los derechos humanos fuera tan grande.

Por lo tanto, en vista de la inacción del Consejo de Seguridad, el 29 de abril del mismo año, se aprobó la primera Resolución (S-16/1), por el Consejo de Derechos Humanos, para que “investigara todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y estableciera los hechos y las circunstancias de esas violaciones y de los delitos cometidos, a fin de evitar la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas” (ONU 2011, pág. 7).

Francia, Estados Unidos y Reino Unido, el 25 de mayo, hicieron un llamado ante el Consejo de Seguridad para que impusiera la R2P en el conflicto sirio, ya que tenían las pruebas suficientes para demostrar que el gobierno de Basher Al-Assad no cumplía con su obligación de proteger a los ciudadanos. Por su parte, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos fue muy claro al señalar que el hecho de usar armas químicas en contra de la población civil era “cruzar la línea roja”, y por lo tanto, debía considerarse la opción de la intervención militar, sin embargo, no hubo voluntad política para hacerlo, y mucho menos después de prometer sacar al país de dos guerras como la de Afganistán e Iraq. (Brumfield 2014, párr. 33) En cuanto a Reino Unido el parlamento votó en contra de la intervención militar, a pesar de las denuncias expuestas por el Primer Ministro David Cameron; y por último el gobierno francés propuso que se interviniera sin la aprobación del Consejo de Seguridad, sin embargo, no tuvo apoyo de la coalición internacional. (BBC 2013, párr. 20)

Y en cuanto a Rusia y China se opusieron argumentando que era una cuestión interna y que no iban a repetir los mismos errores que con la Resolución 1973 que se aprobó en Libia, porque esa acción demostraba el uso excesivo de la fuerza dentro del conflicto. Luego, con base en el informe del 18 de agosto del 2011, de la misión de investigación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, se comprobaron las violaciones que se estaban cometiendo en contra de la población civil, por lo tanto, se aprobó la Resolución 19/22, en la que se le hacía un llamado al gobierno de Basher Al-Assad para que pusiera fin a los actos de violencia. Sin embargo, esto no fue suficiente y según los informes de seguimiento del cumplimiento de la Resolución demostraron que los actos de las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes armados, seguían constituyendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. (Gutiérrez 2015, pág. 105)

Pero ninguna de estas medidas fueron suficientes, precisamente por el desacuerdo entre los miembros del Consejo de Seguridad, ya que China y Rusia hicieron uso de su poder al veto para negarse rotundamente ante una posible intervención militar, porque según ellos no se podía solo responsabilizar al gobierno sirio sino también a los rebeldes. Y es que, el gobierno sirio cuenta con tres aliados estratégicos, Rusia, China e Irán, de los cuales, los primeros dos son miembros del Consejo de Seguridad.

Primero, el gobierno ruso no solo se opone a la intervención militar sino también a un posible embargo de armas, ya que este es el principal proveedor de armamento del régimen, incluso “Rusia posee una base naval en el puerto sirio de Tartus y ha despachado hacia ella un portaaviones, un destructor y dos submarinos” (Lobo, pág. 57).

El régimen sirio aumentó en un 580% sus importaciones de armamento en el periodo 2007-2011 con respecto al quinquenio anterior. Rusia ha sido el principal abastecedor de Damasco. El principal capítulo de importaciones sirias entre 2002 y 2011 ha sido la compra de misiles (por un valor de 349 millones de euros, según el cálculo del SIPRI); sistemas de defensa antiaéreos (348 millones); aviones militares (120); barcos (41); y sensores (34) (Rizzi 2012, párr. 1).

Segundo, Irán por su parte ha apoyado al régimen de Basher Al-Assad porque Siria es el corredor por el cual le suministra armas y recursos a Hezbollah²⁶ en el Líbano, y porque durante este conflicto sirio se ha agudizado la rivalidad entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudí, por lo tanto, Irán teme que de caer el régimen sirio, Arabia Saudí conseguiría un importante triunfo político. (Gutiérrez 2015, pág. 103) Por lo tanto, Siria se ha convertido en un escenario de disputa por el posicionamiento como potencia regional. A pesar de que Irán es un Estado teocrático y Siria secular, tienen enemigos en común para lo cual era necesario que se unieran: “Saddam Hussein, de Irak. También se aliaron para mantener a raya el avance de Israel sobre Líbano y para evitar que Estados Unidos intentara penetrar en la región” (Reynolds 2012, párr. 4).

Tercero, en los últimos años China ha fortalecido los vínculos comerciales, militares y energéticos en la región y planea seguir aumentando su participación en el Medio Oriente. Según la analista del Centro de Política Europea, Amanda Paul, "En 2011 China fue el principal socio comercial de Siria, con exportaciones valuadas en más de US\$2.400 millones. Esto, sin embargo, no es mucho dinero si se compara con el comercio de China en otros países [...]” No obstante, el gobierno Chino se opone a una posible intervención militar es por temor a la presencia militar de Estados Unidos en Siria, lo cual podría

²⁶ Hezbollah “Partido de Dios”, se caracteriza por tener cuatro identidades diferentes: un partido político, una milicia de resistencia, una organización terrorista y una organización social. Hezbollah es una organización que se caracteriza por su resiliencia, su capacidad de salir incluso reforzada de las adversidades y conflictos, evolutiva y adaptativa (hacia una milicia y partido político), basada en un sistema en red, innovadora (utilizando el terrorismo suicida, asesinatos de masas, y secuestros), pragmática (Chafik, 2013), estratégica, y actor de influencia fundamental en la región. (Blanco 2015, pág. 3)

conducir a un escenario de ataque contra Irán, y así tendría mayor acceso a los recursos energéticos de la región. (BBC 2013, párr. 32)

En este orden de ideas, por la negativa de Rusia y China, el Consejo de Seguridad quedaba inhabilitado para aprobar la Responsabilidad de Proteger, por lo tanto, siguieron intentando por la vía diplomática que el gobierno sirio cediera ante los actos de violencia, y por medio de Resoluciones (ya mencionadas) del Consejo de Seguridad, en las que se condenaba el deterioro de la situación humanitaria debido a la violación masiva de los derechos humanos. Posteriormente, la Liga Árabe²⁷ se sumó a esta cruzada por detener la violación de los derechos humanos y junto con la ONU, se aprobó el Plan de Paz²⁸, propuesto por Kofi Annan, sin embargo, este tampoco tuvo éxito, y fue incumplido de manera sistemática por el gobierno sirio. Posterior a esto, entonces el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue una Misión de Supervisión (UNSMIS), conformada en un principio por treinta personas, y después pasó a ser de 300, sin embargo, la misión resultó inútil para alcanzar los objetivos de un cese al fuego entre las partes, además fue atacada, por lo que tuvo que finalizar sin obtener algún resultado. (Marrero 2013, pág. 136)

De esta manera, quedaron expuestos los intentos tanto del Consejo de Seguridad como de la comunidad internacional en general, fueron en vano ya que ninguna resolución fue acatada por el régimen de Basher Al-Assad, y porque otras ni siquiera salieron a la luz por la oposición de algunos Estados por sus intereses, como Rusia y China, y por el contrario, el conflicto empeoró.

La R2P en Siria

Se intentó dentro del Consejo de Seguridad aprobar una resolución bajo este principio para ponerle fin a la violación de derechos humanos en Siria, ya que tenían las pruebas

²⁷ “Es el bloque político más antiguo de la región y hasta hoy el más destacado en la ribera sur del Mediterráneo, aunque su peso estratégico es mucho menor que el de la Unión Europea en el norte. La Liga Árabe fue establecida en 1945 por seis estados de Oriente Próximo, la mayoría de los cuales acababan de acceder a la independencia: Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Iraq y Arabia Saudí. Yemen se sumó el mismo año y otros estados de la zona se fueron adhiriendo conforme recuperaban la independencia [...]” (M’sur, párr. 1-2).

²⁸ “Incluía una serie de pasos que iban desde la cesación de todas las formas de violencia armada por las partes en conflicto, la llegada de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas por el enfrentamiento armado, la liberación de los detenidos de manera arbitraria, la liberación de todas las personas detenidas por manifestarse pacíficamente y de los periodistas extranjeros, hasta la apertura de un proceso político para que la población siria decidiera su futuro” (Marrero 2013, pág. 136).

suficientes para comprobar que el gobierno de Basher Al-Assad no cumplía con la responsabilidad de proteger a la población. Sin embargo, el veto de Rusia y China impidió que se aprobara cualquier medida que implicara la intervención militar, argumentando que este conflicto era asunto interno sirio y no suponía una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

Empero, es evidente que por un lado, faltó voluntad política por parte de Estados Unidos y países de la Unión Europea para hacer uso de estrategias militares que permitieran debilitar el régimen para proteger a la población. Y por otro lado, no había una hoja de ruta clara que pudiera seguir el Consejo de Seguridad en cuanto a la aplicación del principio de la R2P, ya que dentro del mismo organismo se notaba la fragmentación y el desacuerdo en cuanto al respeto de la soberanía y asuntos internos de los países, por esto a pesar de la importancia del concepto en sí, era necesario plantear una serie de reformas sobre el derecho al veto y la aplicación del principio. (Gutiérrez 2015, pág. 113)

Con base en esta necesidad, el presidente de Francia, François Hollande propuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, crear un código de conducta en el que “se excluiría los casos en los que un miembro permanente del Consejo considerase que sus intereses vitales nacionales se ponen en peligro” (François Hollande 2013, citado por Gutiérrez 2015, pág. 114). Este código de conducta plantea que cuando haya una situación de gravedad, como en el caso de Siria, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, renunciarían al derecho al veto, sin embargo, esto solo aplicaría para casos en los que se compruebe por la Comisión alguno de los 4 casos que plantea la R2P: Crímenes de lesa humanidad, genocidio, depuración étnica y crímenes de guerra. Y excluiría “los casos en que los intereses vitales nacionales de un miembro permanente del Consejo corriesen peligro” (Laurent 2013, citado por Gutiérrez 2015, pág. 116).

Esta propuesta es interesante porque tal y como se planea no es necesario hacer una enmienda a la Carta, no obstante, no todos los miembros estarían dispuestos a aceptar esta propuesta. Como en el caso de Rusia, cuyo viceministro de asuntos exteriores, Gennady Gatilov, sostuvo que el gobierno ruso estaba dispuesto a aceptar cualquier reforma al Consejo de Seguridad que contara con el respaldo de la mayoría de los miembros, sin embargo, en cuanto a la modificación del derecho al veto se negaban rotundamente, y en la misma tónica estaba el representante de China ante la ONU. (Gutiérrez 2015, pág. 120)

La responsabilidad de proteger como mucho podría considerarse una norma de *softlaw*, producto de la conexión de tres grandes regímenes internacionales: la igualdad soberana de los estados, el uso de la fuerza y la no injerencia y, por último, la protección de los civiles” (Marrero 2013, pág. 145). En conclusión, la R2P demuestra que no hay una guía clara acerca de la articulación de este principio ni de las instancias en las que se debe ejecutar de manera adecuada.

CONCLUSIONES

Tal y como se ha planteado a lo largo de esta investigación, resulta evidente que el principio de la Responsabilidad de Proteger es un principio que no tiene carácter vinculante, por lo tanto, la comunidad internacional no está obligada a actuar cuando un determinado Estado esté en conflicto, sino por el contrario, queda a la interpretación y voluntad política de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, órgano de las Naciones Unidas con la facultad de aprobar este tipo de intervenciones con fines humanitarios, de lo cual se desprende que los problemas que planteaba la intervención no quedaron resueltos con este principio.

Tampoco se puede apelar en este momento a la creación del carácter vinculante de la R2P a través de la costumbre, ya que como se define en el Derecho internacional “los elementos constitutivos de la costumbre son la práctica común y reiterada de los estados y la toma de conciencia sobre la obligatoriedad de esa conducta, es decir la *opinio iuris*” (Vinuesa 1998, párr. 26), y en este caso no aplica, por ser relativamente un principio nuevo, que no se ha aprobado muchas veces en casos anteriores, y como se ha visto la ambigüedad en cuando aplicarlo es una constante.

En consecuencia, el alcance del principio es muy limitado debido a las falencias en su aplicación, ya que entran en juego los intereses de los Estados que conforman el Consejo de Seguridad. Primero, en cuanto al principio, no está claro en qué momento debe intervenir la comunidad internacional, ya que no toda violación de derechos humanos justifica una intervención militar, es decir, para poder actuar bajo la R2P deben ser violaciones de derechos humanos a gran escala; y segundo, en cuanto a la práctica, surgen algunos interrogantes acerca de si debe ser solo el Consejo de Seguridad el encargado de aprobar o no dichas intervenciones, y si es así entonces se debería hacer una reforma en cuanto al derecho al veto, para evitar que prevalezca el interés particular.

De manera tal que el concepto en sí tiene un trasfondo interesante, el cual si se aplicara, bajo las normas legales del Derecho Internacional, aportaría notablemente al mantenimiento de la paz y la estabilidad del sistema internacional. Pero como se ha demostrado en algunos sucesos acaecidos desde su aparición como son, el conflicto en Libia y Siria, es evidente que existen vacíos tanto en el concepto como en la forma en que se debe implementar, por lo que se ha prestado para que se interprete de acuerdo al interés

particular tanto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir de los miembros permanente del mismo, así como para los Estados fuera de él y las organizaciones internacionales.

En el caso de Libia, con base a las pruebas presentadas por Naciones Unidas y diferentes ONG acerca de las violaciones masivas cometidas por el gobierno en contra de su propia población, la comunidad internacional aprobó casi de inmediato la R2P, mientras que en el caso de Siria, a pesar de la evidencia presentada, con el agravante del uso de armas químicas, la comunidad internacional se mantuvo al margen de la opción militar, permitiendo que se siguieran cometiendo todo tipo de abusos y violaciones a gran escala de derechos humanos. Entonces, esto demuestra que el Consejo de Seguridad tiene ciertas discrepancias ante escenarios similares. Tal y como lo propone Julia Fernández en su artículo “*La responsabilidad de proteger en la comunidad internacional*”:

Esto demuestra que existe un uso discrecional del derecho a veto, alegando cuestiones humanitarias, que se traducen en pérdida de credibilidad en las funciones del Consejo de Seguridad. [...] Los proyectos que implicaban una intervención en territorio sirio fueron vetados por miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que poseen intereses económicos en la región. Entonces, si bien el escenario en Siria es de características similares y casi idénticas al caso de Libia, el Consejo de Seguridad no pudo activar las acciones contenidas dentro del Capítulo VII de la Carta. Así, las consideraciones e intereses políticos de Rusia y China, prevalecieron en el Consejo de Seguridad por sobre los intereses de protección de los derechos humanos (Fernández 2013, pág. 65).

En este orden de ideas, se concluye que hay un vacío en cuanto a quién debe decidir cuándo y cómo se debe intervenir, este es quizá uno de los puntos más difíciles, ya que el Consejo de Seguridad es en teoría quien tiene la competencia y capacidad para tomar este tipo de decisiones, pero históricamente ha demostrado que casi nunca actúa ante las situaciones que lo ameritan, debido a los intereses de sus miembros permanentes, por lo tanto la mayoría de veces son los Estados los que promueven que se intervenga en otro Estado, a veces con presión de algunas ONG. Es por esto, que se hace necesario replantear por parte del Secretario General de las Naciones Unidas cómo se debe hacer uso de este instrumento para el mantenimiento de la paz dentro del sistema internacional.

A partir de lo expuesto, se demuestra entonces que el principio de la Responsabilidad de Proteger permite entender que en la actualidad la soberanía dejó de ser un concepto absoluto y pasó a ser mucho más flexible, ya que exige que cada Estado sea responsable del cumplimiento de los derechos humanos, o de lo contrario la

responsabilidad recae en la comunidad internacional, teniendo esta “una obligación subsidiaria en aquellos casos en donde el Estado no pueda o quiera ejercer su responsabilidad” (Fernández 2013, pág. 64). Y de esta forma, se daría paso a posibles intervenciones militares, bajo ciertas condiciones, y en última instancia. Ya que según el proceso del principio es fundamental intentar por vías diplomáticas y el diálogo llegar a un acuerdo antes de la intervención.

Finalmente, se debe cuestionar la naturaleza del concepto, ya que tal y como lo ha entendido la comunidad internacional, solo ha servido para justificar las intervenciones militares, ha sido como “una carta blanca para extralimitarse de todas las formas posibles del mandato originariamente concedido” (Amoedo 2011, pág. 31), tal y como pasó en el caso de Libia, el conflicto se prolongó y la OTAN no se centró en el objetivo principal de detener la violación de derechos humanos sino en el derrocamiento del régimen de Gaddafi.

En este orden de ideas, se puede afirmar que la principal crítica a este tipo de intervención militar humanitaria, se centra en que el principio, debido a las ambigüedades es implementado y movido por intereses particulares. Por lo tanto, la solución que propone Francois Hollande, explicada en el capítulo anterior, de crear un código de conducta conllevaría a evitar que primaran los intereses propios en el Consejo de Seguridad, ya que se renunciaría al derecho al veto en caso de que se compruebe que es más que necesaria la intervención para detener la violación de derechos humanos a grandes escalas.

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULOS DE LIBRO

Bellamy, A. (2009). Sovereignty and human rights. En Polity Press (Eds.), *Responsability to protect. The global effort to end mass atrocities* (págs. 8-27). Cambridge: Polity.

Barbé, E. (2007). El sistema internacional. En Tecnos (Eds.), *Relaciones Internacionales* (165-169).

Chetail, V. (2009). Introduction: Post-conflict Peacebuilding- Ambiguity and Identity. En Oxford University Press (Eds.), *Post-conflict Peacebuilding* (págs. 1-26). New York: Oxford University.

Donnelly, J. (2005). Realism. En *Theories of international relations* (págs. 31-55). New York

Escudero Espinosa, J. (2002). Cuestiones en torno a la intervención humanitaria y el derecho internacional actual (págs. 270-332). León: Universidad de León.

Keohane, O., Nye J. (1988). Realismo e interdependencia compleja. En *Poder e interdependencia: la política mundial en transición*. (págs. 39-56).

Keshavjee, M. M. (2013). The Sharia, religious law of Muslims. En *Islam, Sharia & Alternative Dispute Resolution: Mechanisms for Legal Redress in the Muslim Community* (Pág. 57-80). London: I.B.Tauris.

Krasner, S. (1983). Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables. En *International Regimes* (págs. 1-21). Nueva York: Cornell University Press.

Nigosian, S.A (2004). Faith and action. En *Islam: it's history, teaching and practices* (pág. 93-119). USA: Indiana University Press.

Pereira, J. (2009). El nuevo orden internacional. La organización de las Naciones Unidas. En... Historia de las relaciones internacionales contemporáneas (págs. 471-497). Barcelona: Ariel.

Romeva, R. (2003). La comunidad internacional y la gestión del conflicto en Bosnia y Herzegovina: fases prebélica, bélica y negociadora. *Bosnia en paz lecciones, retos y oportunidades de una posguerra contemporánea* (págs. 60-70). Madrid: Los libros de la catarata.

Warner, D., y Giacca, G. (2009). Responsibility to protect. En Oxford Univerity Press (Eds.), *Post-conflict Peacebuilding* (págs. 291-304). New York: Oxford University.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ACADÉMICAS

Aceves, L. (2004). Cambios en el sistema internacional westfaliano. *Aportes*, (025), 39-59. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/376/37602504.pdf>

Añaños, M. (2013). La intervención militar autorizada de las Naciones Unidas en Libia: ¿Un precedente de la “Responsabilidad de proteger”? Instituto de Estudios Internacionales 45(174), 27-58. Disponible en: <http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/26995/30139>

Arredondo, R. (2010). La responsabilidad de proteger: De la noción a la acción. Pensamiento propio (29), 185-208. Disponible en: http://www.cries.org/wp-content/uploads/2010/05/La-R2P-de-la-nocion-a-la-accion_Arredondo.pdf

- Blanco, J. (2015). Hezbollah: el partido de Dios. Instituto Español de Estudios Estratégicos (01), 1-32. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf
- Caballero S. y Tabernero, C (2015). De lo nacional a lo transfronterizo. Resistencias a la estatalidad en África y Latinoamérica. Íconos (51), 117-130. Disponible en: <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1476>
- Cadet, J. (2002). Pros y contras de la intervención humanitaria en el siglo XXI. *Prolegómenos*, (29), 79-93. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87625419006>
- Cubajante, X. (2009). La seguridad internacional: evolución de un concepto. *Revista De Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 4(2), 93-106. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92712972007>
- Cruz, P. (2010). Soberanía y transnacionalidad: Antagonismos y consecuencias. *Revista Jurid*, 7(1), 13-36. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3360731>
- Del Arenal, C. (1989). La teoría de las relaciones internacionales hoy: debates y paradigmas. *Estudios Internacionales* (22), 153-182. Disponible en: <http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Poder-e-Interdependencia/02.pdf>
- Innerarity, D. (2013). La gobernanza global, de la soberanía a la responsabilidad. *CIDOB d'Affers International* (100), 11-23. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4123588>
- González, E. (2007). La reflexión política en Hobbes y Rousseau. *Alegatos* (66), 315-332. Disponible en: <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/60/66-06.pdf>

- Gutiérrez, C. (2015). El conflicto en Siria (2011-2014) a la luz del Derecho Internacional y de la (Geo)política. *Revista UNISCI* (37), 99-131. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/RUNI/article/view/49603>
- Lobo, J. (2012). La intervención humanitaria ante la crisis en Libia y Siria: Un estudio comparativo. *Instituto de Estudio Internacionales* 44(173), 37-66. Disponible en: <http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/26955>
- Marrero, I. (2013). La responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en los casos de Libia y Siria: análisis comparativo. *Relaciones Internacionales*, (22), 127-148. Disponible en: <http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/443.html>
- Palacián, B. (2012). Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2011. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, (03), 1-13. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI03-2012Resoluciones2011_BPI.pdf
- Piedrahita, L. (2015). La soberanía como responsabilidad y los fundamentos del nuevo intervencionismo humanitario. *Estudios de filosofía*, (51), 45-74. Disponible en : http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/estudios_de_filosofia/article/view/22950/18891
- Restrepo, J. (2013). La globalización en las relaciones internacionales: Actores internacionales y sistema internacional contemporáneo. *Revista Facultad de Derechos Humanos y Ciencias Políticas*, 43(119), 625-654. Disponible en: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/2360>
- Rodríguez Soriano, Roberto Israel. (2014). El esencialismo racial y el genocidio: El caso de Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina). *Cuicuilco*, 21(60), 45-66. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592014000200003&lng=en&tlng=en

Zavaleta, S. (2015). El concepto de seguridad humana en las relaciones internacionales. *Revista De Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 10(1), 65-87. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92733014004>

PUBLICACIONES PERIÓDICAS NO ACADÉMICAS

BBC Mundo. (2013, 28 de agosto) ¿Cuál es la posición de los países clave en la crisis de Siria? Editorial Párr. 10. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130827_posicion_paises_clave_en_crisis_siria_bd

El Mundo. (2014, 23 de septiembre). ¿En qué creen los yihadistas?). Editorial Párr.6. Disponible en: <http://www.elpais.com.uy/mundo/yihadistas-terroristas-islamico.html>

Europa Press. (2014, 19 de septiembre). Origen y diferencias entre suníes y chiíes. Editorial Párr. 7. Disponible en: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-origen-diferencias-sunies-chiies-20140919083809.html>

Figueras, A. (2011, 27 de octubre). El Mundo. Párr. 1. Disponible en: <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/27/internacional/1319697213.html>

González, E. (2011, 22 de febrero). Gaddafi, el tirano más cínico. *El País*. Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/02/22/internacional/1298329204_850215.html

Reynolds, J. (2012, 06 de agosto). Por qué Irán necesita a Bashar al Asad en Siria. BBC Mundo. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/08/120802_asad_iran_yv.shtml

Rizzi, A. (2011, 25 de febrero). La principal tribu apoya la lucha contra el dictador libio. *El país*. Disponible en:

http://elpais.com/diario/2011/02/25/internacional/1298588401_850215.html

Rizzi, A. (2012, 19 de marzo). Siria elevó un 580% sus compras de armas en el último quinquenio. *El país*. Disponible en:

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/19/actualidad/1332162925_811431.html

Román, S. (2011, 26 de marzo). Operación “Amancer de Odisea”: La compleja operación de los aliados en territorio africano. *El Mundo*. Disponible en: <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/25/internacional/1301043585.html>

Siegel, R. (2013, 19 de septiembre). ¿Qué pasa en Siria? Una explicación del conflicto. *Animal político*. Disponible en: <http://www.animalpolitico.com/blogeros-inteligencia-publica/2013/09/19/que-pasa-en-siria-una-explicacion-del-conflicto/>

Universidad de Alicante [Servicio de protocolo y relaciones públicas]. (2002). Biografía intelectual de Johan Galtung. Disponible en: <http://web.ua.es/es/protocolo/documentos/eventos/honoris/galtung-johan-2002/biografia-intelectual-de-johan-galtung.pdf>

OTROS DOCUMENTOS

Amoedo, D. (2011). La Responsabilidad de Proteger: ¿Un principio que ya caducó? En Instituto de Estudios sobre conflictos y Acción Humanitaria. Disponible en: http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&id=1722:la-responsabilidad-de-proteger-iun-principio-ya-caduco&Itemid=85

Amnistía Internacional. (2011). El estado de los derechos humanos en el mundo. Disponible en: http://files.amnesty.org/air11/air_2011_full_es.pdf

Bellamy, A. (2010). The responsibility to protect – Five years on. En Ethics and International Affairs. Disponible en: <http://responsibilitytoprotect.org/Bellamy.pdf>

Bermejo, B., López-Jacoiste, E. (2013). De la intervención por causas humanitarias a la responsabilidad de proteger: Fundamentos, similitudes y diferencias. En Instituto español de estudios estratégicos. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_160_La_respuesta_del_Derecho_Internacional.pdf

Biografía intelectual de Johan Galtung. (2002). Universidad de Alicante. [Servicio de protocolo y relaciones públicas]. Disponible en: <http://www.ua.es/es/presentacion/doctores/galtung/biografia.htm>

Bosnia y Herzegovina (1995). Escola de cultura de pau en Agencia Española de cooperación internacional. Disponible en: <http://escolapau.uab.cat/img/programas/rehabilitacion/paises/06bosn.pdf>

CIDOB. “Alija Izetbegovic”. Biografías líderes políticos. (s.f). Disponible en: http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/bosnia_herzegovina/alija_izetbegovic

Espósito, C. (2004). Uso de la fuerza y responsabilidad de proteger. El debate sobre la reforma de la ONU. En Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Disponible en: https://www.uam.es/personal_pdi/derecho/esposito/DIP/Esposito-Responsabilidad%20de%20Proteger.pdf

Human Rights Watch (2015). Informe Mundial 2015:Siria. Disponible en: <https://www.hrw.org/es/world-report/2015/country-chapters/268206>

International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). “The responsibility to protect”. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Disponible en: <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>

Marie, JB (2008). Los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/a12008.pdf>

M’Sur (s.f). Liga Árabe. Disponible en: <http://msur.es/politica/bloques/liga-arabe/>

Naciones Unidas (2005). Documento final Cumbre Mundial. Disponible en: <http://daccess-dds.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/63/PDF/N0548763.pdf?OpenElement>

Naciones Unidas (2009). Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/63/677>

Naciones Unidas (2011). UNSMIL se prepara para comenzar sus labores en Libia. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=21839#.Vh_Orlzgj9g

Naciones Unidas. “Capítulo VI”. Carta de las Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter6.shtml>

Naciones Unidas. “Capítulo VII”. Carta de las Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter7.shtml>

Naciones Unidas. “Notas de introducción”. Carta de las Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/charter/intro.shtml>

Pizarro, R. (s.f). Conceptos de Estado y Nación. Disponible en: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=877

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. “Nuevas dimensiones de la seguridad humana”. Informe de Desarrollo Humano, 1994. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf

Stavenhagen, R. (2010). Limpieza étnica. En UNAM. Disponible en: http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/445trabajo.pdf

Vinuesa, R. (1998). La formación de la costumbre en el Derecho Internacional Humanitario. En CICR. Disponible en: <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlp2.htm>

ANEXOS

Anexo No. 1: Resoluciones aprobadas por la ONU en Libia durante el 2011

RESOLUCIÓN	FECHA	TEMA
1970	26 de febrero 2011	Aprobada por el Consejo de Seguridad. Plantea la preocupación de la comunidad internacional por la situación de la violación de derechos humanos. Por lo tanto, hace un llamado al gobierno libio para que se respeten los derechos humanos y para que permita la entrada de suministros sanitarios. Además se toman medidas como el embargo de armas, se prohíbe que salga del territorio libio Gaddafi, y se aprueba la congelación de activos del régimen y de sus familiares.
1973	17 de marzo 2011	Se exige el cese del fuego y de todos los ataques y abusos contra civiles. Se autoriza a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para proteger a la población civil, excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera. Se solicita la colaboración de la Liga de Estados Árabes. Se establece una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles. Se pide a los países miembros que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la estricta aplicación del embargo de armas de la Resolución 1970. Se prohíben los vuelos de toda aeronave matriculada en la Jamahiriya Árabe Libia o de propiedad de nacionales o empresas de ese país o utilizada por ellos. Se amplía el ámbito de la congelación de activos. Se establece un Grupo de Expertos.
2009	16 de septiembre 2011	Se aguarda con interés el establecimiento de un Gobierno de transición inclusivo y representativo en Libia, y pone de relieve la necesidad de que el período de transición se sustente en un compromiso en pro de la democracia, la buena gobernanza, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos; Se establece una Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). Se decide que la Libyan National Oil Corporation (LNOC) y la Zueitina Oil Company dejarán de estar sujetas a la congelación de activos y otras medidas impuestas en la resoluciones 1970 y 1973. Se modifican las medidas con respecto al Banco Central de Libia, el Banco Exterior Árabe Libio (LAFB), la

		Dirección General de Inversiones de Libia (LIA) y la Libyan Africa Investment Portfolio (LAIP) La prohibición de vuelos deja de tener efecto.
2016	27 de octubre 2011	Se decide que la protección de los civiles solicitada en la Resolución 1973 y la zona de prohibición de vuelos quedan sin efecto.
2017	31 de octubre 2011	Exhorta a las autoridades de Libia a que adopten todas las medidas necesarias para impedir la proliferación de los armamentos y materiales conexos de todo tipo, asegurar su custodia apropiada y cumplir las obligaciones en materia de control de armamentos, desarme y no proliferación. Pide a los Estados Miembros y organizaciones y entidades internacionales y regionales a que presten asistencia a Libia y a los Estados de la región para cumplir este objetivo.
2022	2 de diciembre 2011	Se prorroga hasta el 16 de marzo de 2012 el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). Decide que su mandato incluirá, además, la prestación de asistencia y apoyo a los esfuerzos nacionales libios para afrontar las amenazas que entraña la proliferación de los armamentos y materiales conexos de todo tipo.

Fuente: (Palacian 2012, pág. 4-5).

Anexo No 2: Resoluciones aprobadas por la ONU en Siria durante el 2012-2014

RESOLUCIÓN	FECHA	TEMA
2139	22 de febrero de 2014	Aprobada por el Consejo de Seguridad. Hace un llamado a las partes del conflicto sirio para: 1. poner fin a la violación de derechos humanos, basados en el Derecho Internacional Humanitario. 2. Se le exige al gobierno sirio que permita la ampliación de las operaciones de auxilio humanitario. 3. Se exige que se levante el asedio a las zonas pobladas. 4. Se deben tomar todas las medidas necesarias para detener los abusos a la población civil.
2118	27 de septiembre de 2013	Aprobada por el Consejo de Seguridad. 1. Rechaza el uso de armas químicas, tal y como se comprobó en el Informe de la Misión, recordando de esta manera que todos los Estados tiene la obligación, según la Resolución 1540 del 2004, de que "se abstengan de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas de destrucción en masa, como las armas químicas, y sus sistemas vectores" (ONU 2013, pág. 2).
2042	14 de abril de 2012	Aprobada por el Consejo de Seguridad. Se le hace un llamado al gobierno sirio para que ponga en práctica la propuesta de los 6 puntos del Enviado Especial, para que se comprometa a: 1. detener los movimientos de tropas hacia los centros de población, 2. dejar de utilizar armas pesadas en estos lugares, y 3. iniciar la retirada de las concentraciones militares en los centros de población y en sus alrededores (ONU 2012, pág. 1). Se autoriza la entrada de un equipo de 30 observadores militares no armados para que sirvan de mediadores entre las partes, y para esto el gobierno sirio debe garantizar que este equipo cumpla con su función.
2043	21 de abril de 2012	Aprobada por el Consejo de Seguridad. El gobierno sirio debe poner en práctica los 6 puntos que se comprometió a cumplir a partir del 25 de marzo de ese mismo año. "Decide establecer, por un plazo inicial de 90 días, una Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria (UNSMIS), bajo el mando de un Jefe de Observadores Militares, formado por un despliegue inicial de hasta 300 observadores militares no armados" (ONU 2012, pág. 3).

Fuente: Naciones Unidas

